



VeámoNos:

Visiones empresariales

de la inclusión



Directora Ejecutiva de la FIP

Maria Victoria Llorente Sardi

Directora Área de Construcción de Paz

María Lucía Méndez Lacorazza

ISBN

978-628-7558-25-0

Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Calle 100 No. 8A - 37 Torre A. Of. 701.

Bogotá Tel. (57-1) 218 3449

www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

Los textos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la **Fundación Konrad Adenauer, KAS**.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción y la comunicación pública total o parcial y la distribución, sin la autorización previa y expresa de los titulares.

Coordinadores del proyecto

Miguel Suárez Pulido

Felipe Zarama Salazar

Autores

Valentino Benedetti Ramírez

Juan Pablo Rangel Estrada

José Luís Vanegas Jiménez

Edición y corrección de estilo

Martín Franco Vélez

Fotografías

Canale de Comunicación

Diseño y diagramación

Canale de Comunicación

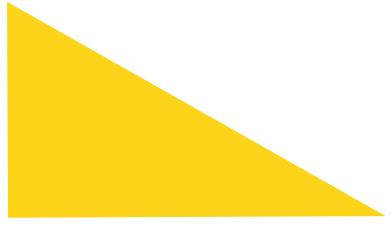


Tabla de contenido

Resumen ejecutivo	04
Introducción	10
El contexto económico como condicionante de la inclusión	14
Diferencias territoriales en los niveles de inclusión: <i>una aproximación desde la situación de víctimas del conflicto y población migrante venezolana</i>	24
Población víctima del conflicto	25
Migrantes de origen venezolano	29
La percepción del sector empresarial sobre la inclusión	38
Análisis de los factores que inciden en la percepción de empresarios sobre la situación económica de sus ciudades	43
Análisis de los factores que inciden en la percepción de empresarios sobre la confianza hacia la población migrante venezolana	46
Correlaciones entre la percepción de la situación económica, niveles de confianza hacia migrantes y variables del contexto económico	46
Tabla de resultados	47
Conclusiones	50
Referencias	54
Anexos	56
Lista de variables	57

Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

¿Cuál es el vínculo entre inclusión y construcción de paz? ¿Es la inclusión un proceso necesario para alcanzar la paz o, por el contrario, es el resultado de la paz? Estas preguntas han guiado la agenda de trabajo e investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La inclusión es un factor ineludible para hablar de construcción de paz, de transformación del territorio y de impulso de procesos de desarrollo sostenible. Es sobre esta premisa que, desde 2021, la alianza entre las dos organizaciones ha buscado profundizar el entendimiento sobre los factores que inciden en la creación y consolidación de dinámicas y procesos inclusivos en el país.

Este año, continuando con el trabajo adelantado conjuntamente en 2021, buscamos comprender las dinámicas territoriales de la inclusión. Nos propusimos buscar diferentes perspectivas y voces para entender y contrastar las nociones y visiones territoriales sobre cómo se puede entender la inclusión y cómo se debe incluir a la población vulnerable en tres ciudades capitales de Colombia: Barranquilla, Cali y Medellín. Para ello, desde la FIP y la KAS convocamos unos encuentros con grupos de interés para entender y contrastar las nociones (cómo se entiende el concepto de inclusión) y visiones (cuáles son sus expectativas) de la inclusión, particularmente con personas y colectivos que son sujetos de inclusión (excombatientes, migrantes, víctimas, jóvenes y mujeres). Incluimos también los contextos de acogida y receptores que pueden contribuir con la efectiva integración, como las comunidades, el sector empresarial, las autoridades y la academia.

Este documento expone el panorama sobre los condicionantes de inclusión que existen en Barranquilla, Cali y Medellín. Uno de sus propósitos es el de explorar los contextos de las tres ciudades para

analizar los factores contextuales que inciden en sus niveles de exclusión e inclusión, abordando el contexto y problematizando sobre cómo este afecta las dinámicas de inclusión sociolaboral de las poblaciones vulnerables.

La hipótesis de la cual parte esta investigación es que el contexto económico determina las percepciones y expectativas que tienen los empresarios sobre la contratación de personas que hacen parte de grupos poblacionales con vulnerabilidades para la inserción laboral. Decidimos hacer énfasis en la dimensión económica de la inclusión dada la relación que existe entre los conceptos de vulnerabilidad y pobreza: los hogares tienen más o menos riesgos de tener exclusiones al goce efectivo de derechos en cuanto tienen control sobre recursos y activos para tomar decisiones que los lleven a elevar sus niveles de bienestar o mantenerlo ante situaciones que lo ponen en amenaza (Katzman, 1999). En ese sentido, la dimensión económica se reconoce como catalizadora del bienestar en los hogares, y más específicamente la inclusión laboral como el escenario de interacción más explícito entre las empresas y los hogares, en el cual, al final, las personas pueden insertarse de manera productiva para suplir sus necesidades básicas a través del consumo.

En este documento resaltamos que en cada uno de los contextos de las ciudades existen variables que expresan los desafíos de las distintas poblaciones al momento de ser incluidas desde una dimensión económica. Con el fin de expresar los diferentes desafíos contextuales que tiene las ciudades para superar las situaciones de exclusión, tomamos como punto de partida para el análisis contextual los indicadores de pobreza monetaria, el índice de pobreza multidimensional y el índice de Confianza al Consumo. El objetivo es caracterizar las dinámicas contextuales que inciden en los niveles de inclusión laboral de poblaciones vulnerables para acceder al empleo.

Los niveles de inclusión en el país están marcados por la reciente afectación económica debido a la emergencia social y sanitaria derivada del covid-19. Las diferentes mediciones contempladas en este documento demuestran cómo la pandemia generó un retroceso en los indicadores económicos de las tres ciudades. En términos de pobreza monetaria, el 27% de personas en Medellín, el 29,3% en Cali y el 35,7% de Barranquilla son consideradas pobres, situación que osciló de manera más pronunciada entre 2022 y 2021 para el caso de Cali y Barranquilla. Igual sucede con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), donde Barranquilla es la ciudad que reporta los indicadores con mayores niveles de exclusión frente al goce efectivo de derechos, comparándola con Cali y Medellín, pues sobrepasa la media nacional en 6 de los 15 indicadores que lo componen.

Los efectos de la recuperación económica tienen repercusiones directas en los índices de inclusión laboral, donde el contexto en el que están las personas condiciona los niveles de inclusión. Entre 2019 y 2021 la tasa de ocupación de la clase alta fue del 71,5%, mientras que para los pobres fue del 43,8%. Además, las personas de clase alta tienen en promedio 3,6 años de educación superior adicionales a la clase baja. Eso tiene efectos directos en la tasa de ocupación, ya que quienes poseen este nivel educativo tienen 23,8% más de chance de estar ocupados en relación con quienes cuentan con un título de educación secundaria o inferior.

En Colombia, las clases altas reportaron una informalidad del 17,3% en 2021. Cifra que contrasta con el 73,8% reportado para las clases bajas donde, además, se reportan brechas significativas entre la situación de hombres y mujeres. Esto afecta de manera directa la recuperación de la calidad de vida previa a la pandemia, donde la recuperación entre jefes del hogar se dio de manera más marcada entre clases altas (3,62 puntos porcentuales) que en las clases bajas (2,57 puntos porcentuales). Una situación que trae retos

para el cierre de brechas de inequidad: como se evidencia, la pandemia ha profundizado las desigualdades de los hogares que cuentan con capacidades asimétricas para sobreponerse a esta situación.

Para hacer una aproximación empírica a las diferencias territoriales en los niveles de inclusión, realizamos un análisis de datos a partir de información pública y encuestas de percepción empresarial frente a la situación de víctimas del conflicto y población migrante venezolana.

Las principales privaciones a las que se exponen las víctimas del conflicto armado están relacionadas con la generación de ingresos, condiciones de vivienda y el goce efectivo del derecho a la salud. A pesar de que el 76% de ellas consideran que están por encima de las situaciones de vulnerabilidad (SSV), todavía existe un gran rezago en materia de inclusión social para esta población. A nivel de los municipios de interés, en Barranquilla el 85,9% cumple con las condiciones; en Medellín, el 83,2%; y en Cali, el 72,3%. Es importante resaltar que, en números totales, el universo de víctimas en Medellín duplica el número de registros en Cali y quintuplica los de Barranquilla, una situación que genera presiones adicionales en las capacidades de las instituciones competentes para priorizar a esta población. También encontramos que, para las tres ciudades de referencia, los asuntos relacionados con la generación de ingresos, acceso a vivienda y atención psicosocial son las variables en las que se encuentran mayores niveles de exclusión, siguiendo la tendencia nacional.

La situación legal de los migrantes venezolanos es la principal barrera para el goce efectivo de derechos. Por la llegada masiva de personas que han cruzado la frontera de manera irregular, un gran número de migrantes no tienen su situación migratoria resuelta. Esto es un obstáculo para el desarrollo de un proyecto de vida en Colombia: desde el acceso a la oferta

pública institucional del Estado colombiano, hasta la existencia jurídica para suscribir contratos y tener propiedades. El ETPV es la principal política para la integración de población migrante de origen venezolano, reconociendo su derecho al refugio.

Barranquilla se encuentra rezagada frente a las condiciones de pobreza y garantía material de derechos de poblaciones vulnerables, si observamos los niveles de goce efectivo de derechos de población migrante y víctima del conflicto a partir del índice de superación de situación de vulnerabilidad (SSV) y el Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica de la población migrante venezolana en Colombia (IMI). Esto puede, además, condicionar la toma de decisiones de los empresarios en cuanto su percepción de la situación económica y expectativas, que se ve afectada por estas realidades de las ciudades.

Por el lado del sector privado, los empresarios consideran que la construcción de paz es un deber: ocho de cada 10 creen que el sector empresarial debe vincularse a ella. En las ciudades, este porcentaje asciende al 87% para el caso de Barranquilla, 82% en Medellín, y 78% en Cali. Cuando en la encuesta de percepciones frente a la migración se pregunta sobre la importancia de las medidas de integración a migrantes, el 74% las considera importantes o muy importantes.

Las dos principales razones elegidas por los empresarios para vincular al sector empresarial con la construcción de paz están estrechamente relacionadas con la agenda de desarrollo territorial inclusivo. Aquí es clave el enrolamiento del sector empresarial en las acciones afirmativas como una responsabilidad con el entorno, pero también como una oportunidad para fortalecer la actividad económica de las empresas a través de la inclusión de dichas personas en sus cadenas de valor.

Es mucho más probable que las empresas participen en las lógicas de inclusión si ven un compromiso por

parte de la institucionalidad. Las percepciones empresariales también están marcadas por la percepción que tienen las empresas sobre la articulación entre el Estado y el sector privado, algo que debe leerse como la capacidad de orientar acciones comunes para el propósito de incluir y que requiere de una sumatoria de esfuerzos hacia ese objetivo. Las empresas están dispuestas a participar en las lógicas de inclusión, pero requieren una línea orientadora que les permita tomar decisiones. Un asunto que debe liderarse desde las autoridades municipales en concurso con gremios empresariales y representativos del sector privado, que lideren una discusión sobre las formas en las cuales el involucramiento empresarial resulte estratégico para la inclusión. Esto, por supuesto, afecta las percepciones futuras del contexto económico de la ciudad, pues en la medida que se encuentra coherencia entre los esfuerzos de autoridades locales con el sector privado, habrá mayor optimismo para realizar los objetivos trazados.

Los empresarios que identifican la falta articulación público-privada como un factor que afecta el contexto económico actual de la ciudad, tienen una percepción en promedio inferior sobre la situación actual de la economía de su ciudad. Esto sugiere que el trabajo entre el sector público y empresarial es importante para facilitar la inclusión laboral de población vulnerable, como la migrante.

Las empresas que han participado en acciones dirigidas a población migrante tienen, en promedio, mejor percepción sobre la situación actual de la economía de su ciudad, lo que propicia su involucramiento en políticas inclusivas. Esto se debe a que trabajar con migrantes les ha cambiado su percepción frente a esta población. En contraste, quienes consideran a las víctimas del conflicto como una oportunidad, tienen percepciones más positivas sobre la situación económica.

El propósito de este documento es profundizar en las variables contextuales que inciden en la inclu-

sión sociolaboral de poblaciones vulnerables, teniendo presentes los índices de pobreza monetaria y multidimensional, así como las percepciones de las empresas frente a la realidad económica de sus ciudades. Lo que concluimos es que los niveles de inclusión de las poblaciones en términos laborales —al menos desde la percepción del sector empresarial— están condicionados por asuntos como la incidencia de la pandemia, los niveles de desempleo e informalidad, la percepción de impactos económicos negativos por la llegada de migrantes, y la capacidad de articulación público-privada en el territorio.

Para lograr un involucramiento empresarial estratégico que propicie la inclusión sociolaboral de poblaciones vulnerables, se necesita conocer los condicionantes contextuales de las ciudades, así como las percepciones del propio entorno empresarial y los mecanismos bajo los cuales interactúan. Este documento busca contribuir a la reflexión señalando las correlaciones entre las variables contextuales y la percepción empresarial, para que sirva de insumo a la reflexión sobre las condiciones en las cuales se hace posible la integración sociolaboral de poblaciones vulnerables.

Introducción

Introducción

La construcción de paz es un proceso estrechamente relacionado con las agendas de inclusión y reducción de la pobreza. A tal punto que no existe consenso sobre si la inclusión es un proceso necesario para lograr la paz o, por el contrario, si es un resultado, una evidencia de la paz. Desde el punto de vista de la paz positiva¹, la agenda de inclusión es la forma de cerrar las brechas de desigualdad en el goce efectivo de derechos, garantizando que todas las personas encuentren condiciones de vida dignas, especialmente las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para avanzar en la consecución de la justicia social.

Aunque la agenda de inclusión hace parte de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la conexión más explícita entre inclusión y construcción de paz se encuentra de manera particular en el ODS 16 de Paz, justicia e instituciones sólidas. Allí se incluyen metas asociadas a garantizar la adopción de decisiones inclusivas que respondan a las necesidades y en favor del desarrollo sostenible, y se advierte sobre la importancia de atacar los factores estructurales y culturales de la violencia para garantizar la sostenibilidad de la paz.

En años recientes, la FIP ha tenido experiencias de trabajo con poblaciones que están afectadas por diferentes tipos de exclusión social. A partir de ellas, se ha reunido un acervo de conocimientos teóricos y prácticos sobre las implicaciones de la inclusión en los procesos de construcción de paz. Entre otros, se resalta el trabajo realizado con población excombatiente y víctima del conflicto, jóvenes, mujeres y población migrante de origen venezolano, que ha servido para encontrar diferen-

cias y puntos comunes frente a los retos que asume la sociedad colombiana en el proceso de inclusión de estos grupos poblacionales.

Con este contexto en mente, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Konrad Adenauer desarrollamos a largo del año 2022 el proyecto Veámonos: visiones de inclusión, una iniciativa para reflexionar en torno a la inclusión como concepto central de la sostenibilidad de la paz. En alianza con la KAS, buscamos responder a esa pregunta desde varias orillas con una agenda de trabajo e investigación emprendida conjuntamente en 2021.

Primero, el documento *¿Qué sabemos de la inclusión y su relación con la construcción de paz?*, aborda cómo se ha entendido el concepto y su relación en la literatura. Para profundizar sobre la comprensión de las nociones y visiones de la inclusión, convocamos una serie de encuentros en Cali, Barranquilla y Medellín con representantes empresariales, practitioners —personas y organizaciones que se dedican a trabajar por la inclusión en el sector público, la sociedad civil y la cooperación internacional— y sujetos de inclusión que pertenecen a poblaciones vulnerables o sensibles al conflicto, como víctimas, excombatientes, migrantes y mujeres y jóvenes con una aproximación de interseccionalidad—es decir, cómo los desafíos de inclusión se profundizan por el género o la edad de la persona—. Nos interesaba de manera particular conocer cómo estos grupos (el sector empresarial, los practitioners y sujetos de inclusión) entienden en el concepto de inclusión y cómo ven el proceso y el resultado de una sociedad más inclusiva. Las reflexiones allí suscitadas se sintetizaron en el documento *Visiones territoriales de inclusión: nociones en Cali, Barranquilla y Medellín*.

1. Galtung, 1969

Por el papel central que cumple, este documento aborda la perspectiva del sector empresarial. Parte de un especial interés en la inclusión económica de las poblaciones vulnerables, en particular frente a su empleabilidad, teniendo en cuenta que este es un vehículo efectivo para la garantía material de derechos a partir de la reducción de la pobreza, la mejora de la calidad de vida de las personas y la movilidad social.

No obstante, de acuerdo con el investigador uruguayo Pablo Guerra², las políticas de inclusión social se entrelazan con el mercado del trabajo en cuanto 1) buscan atender una vulnerabilidad con respecto a este mercado; es decir, desde las barreras de acceso y lo que eso significa en términos de vinculación a seguridad social y consumo de bienes y servicio; y (2) cuando el proceso de inclusión amerita una respuesta desde el trabajo; es decir, cuando el sujeto vulnerable tiene barreras en su vida que trascienden las condiciones materiales de acceso a empleo, y en las cuales el acceso a trabajo se convierte en una acción afirmativa. En este postulado se basan las principales acciones diferenciadas a grupos vulnerados en su acceso a empleo, como mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, etc.

Por eso resulta relevante entender las percepciones del sector empresarial. Se requiere información que permita afinar acciones precisas con el fin de incentivar el involucramiento empresarial estratégico para el desarrollo; es decir, contemplando enfoques inclusivos hacia poblaciones que han sido marginadas de los circuitos de empleabilidad debido a los contextos excluyentes en los que se encuentran.

La construcción de paz sucede en un contexto concreto. Uno de los propósitos de este documento es explorar los contextos de Barranquilla, Cali y Medellín para analizar los factores contextuales que inciden en los niveles de inclusión de estas ciudades. Para ello, este texto aborda, en primer lugar, el contexto de las tres ciudades priorizadas por el proyecto, y problematiza sobre cómo el contexto afecta las dinámicas de inclusión. Para ello se toman variables de aproximación que ayudan a caracterizar los principales condicionantes contextuales que inciden en la inclusión de poblaciones vulnerables. Sin embargo, para acotar las características del contexto que inciden en la inclusión en variables de aproximación, el criterio de selección de las variables de interés está relacionado con las definiciones clásicas de medición de pobreza (pobreza monetaria y multidimensional), así como otras que recogen dinámicas contextuales del entorno empresarial, como es el caso del Índice de Confianza al Consumidor. El propósito es recoger el mayor número de variables contextuales observables en indicadores.

En segundo lugar, este texto busca dar cuenta de información que permita complejizar el análisis sobre las percepciones del sector empresarial colombiano frente a la inclusión laboral de poblaciones vulnerables para acceder a un empleo, en particular población víctima del conflicto armado y migrantes de origen venezolano. Para ello, hace una revisión de antecedentes de mediciones relevantes que hayan abordado de manera directa las percepciones de empresarios con respecto a las acciones de inclusión laboral, o bien otras mediciones que permitan identifi-

2. Guerra (2011) Alcances y orígenes de las políticas de trabajo, de empleo e inclusión social.

3. FIP & KAS, 2021. Encuesta realizada para la investigación Entendiendo la Mirada Empresarial frente al Fenómeno Migratorio realizada por la FIP y KAS, que es el antecedente investigativo que precede a esta investigación de inclusión donde se focalizan otros grupos poblacionales. FIP & KAS, 2021. Encuesta realizada para la investigación Entendiendo la Mirada Empresarial frente al Fenómeno Migratorio realizada por la FIP y KAS, que es el antecedente investigativo que precede a esta investigación de inclusión donde se focalizan otros grupos poblacionales.

car vacíos de información que puedan ser abordados en posteriores mediciones.

Luego se explorarán los datos de la encuesta de percepción empresarial frente al fenómeno migratorio³ para buscar relaciones que permitan caracterizar las fuerzas que movilizan las percepciones empresariales. De esa manera, los aprendizajes frente a lo que sucede con el fenómeno migratorio podrán ser testeados con otros grupos poblacionales de especial atención.

Por último, exponemos los resultados de los encuentros de conversación con el sector empresarial en las tres ciudades priorizadas, con el ánimo de triangular las expresiones territoriales del sector con los hallazgos previamente descritos. Esto permitirá identificar posibles rutas de investigación subsecuentes y robustecer las conclusiones frente a los determinantes contextuales que inciden en la contratación de personas que pertenecen a grupos poblacionales vulnerables.

Este texto busca dar cuenta de información que permita complejizar el análisis sobre las percepciones del sector empresarial colombiano frente a la inclusión laboral de poblaciones vulnerables para acceder a un empleo, en particular población víctima del conflicto armado y migrantes de origen venezolano



El contexto económico como condicionante de la inclusión

El contexto económico como condicionante de la inclusión

La hipótesis de la cual parte esta investigación es que el contexto determina las percepciones y expectativas que tienen los empresarios sobre la contratación de personas que hacen parte de grupos poblacionales con vulnerabilidades para la inserción laboral. Para ese propósito, tomamos como unidades de análisis las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín, cuya población representa el 15,7% del total nacional, siendo las más pobladas después de Bogotá. Medellín cuenta con 2.612.958 habitantes, mientras en Cali son 2.280.907 y en Barranquilla 1.312.473, según las proyecciones censales del DANE para 2022. Esta priorización permite caracterizar las diferencias regionales en materia de inclusión en regiones con diferentes contextos, que inciden en las dinámicas de inclusión tomando como marco de análisis ciudades que representan una porción relevante de la población urbana del país.

En su historia reciente, la pandemia ha incidido notablemente en los indicadores de las tres ciudades. Para el caso de Cali, por ejemplo, la desigualdad creció respecto de la distribución de la riqueza, que se ubicó en el 2020 en 0,52 según el índice de Gini, mientras en el 2019 fue de 0,47. En el 2020, un total de 1.055.266 personas cayeron en la pobreza, un dato significativo teniendo en cuenta que es una ciudad de 2.228.000 habitantes (Céspedes y Llanos, 2021). Frente al empleo, según el informe “Cali cómo vamos” (2022), 49 de cada 100 caleños en edad de trabajar lo hacían de manera informal y solo 53 de cada 100 jóvenes en edad de trabajar (14-24 años) participaron en el mercado laboral en el 2021. Frente a las otras dos ciudades de este documento, Cali presentó una tasa de participación menor en el mercado laboral.

Sobre la empleabilidad de la población joven, existen grandes desafíos que el sector empresarial viene enfrentando en materia de inclusión laboral.

Pese a las grandes iniciativas que se están dando en la ciudad, en Cali uno de los principales desafíos frente a la inclusión laboral de los jóvenes son los bajos salarios que se ofrecen en las convocatorias laborales. Las ofertas laborales en la ciudad son en su mayoría empleos operativos con salarios mínimos, los cuales no cumplen con las expectativas que los jóvenes tienen en su desarrollo profesional y personal. Este panorama demuestra que Cali continúa teniendo grandes desafíos en materia de inclusión laboral de población joven, lo que los convierte, en gran parte, en una población excluida y vulnerable.

Una situación similar vive Medellín, que también presenta grandes brechas en el empleo formal. Según el informe “Medellín cómo vamos” (2021), a pesar de la recuperación económica del sector empresarial, en el 2021 la ciudad registró los niveles más altos de pobreza de la última década, teniendo la mayor tasa de desempleo. Según el informe, el empleo informal, el bajo logro educativo y el rezago escolar, fueron las principales razones de la pobreza. Lo mismo que en Cali. Los jóvenes fueron el grupo poblacional con mayor nivel de desempleo y logros educativos.

En el caso de Barranquilla las cifras evidencian la heterogeneidad en la gestión de acciones afirmativas hacia grupos poblacionales de sujetos de inclusión. Frente a las víctimas de conflicto armado, como se verá más adelante, Barranquilla es el municipio que ha evidenciado mayor porcentaje de Superación de Situación de Vulnerabilidad entre las tres ciudades estudiadas.

En cambio, para la población migrante de origen venezolano existen brechas importantes entre las observaciones de Cali y Medellín, y las de Barranquilla. Algunas de ellas son positivas. Por ejemplo, Barranquilla cuenta con el mayor número de migrantes venezolanos registrados en el RUMV per cápita, la mayor participación de migrantes de Venezuela llegados al país hace más de cinco años, los mayores

niveles de empleabilidad entre migrantes y las más altas cifras de vocación de permanencia de migrantes. Otras, en cambio, son negativas: la atención a personas gestantes por 1000 mujeres, desnutrición por cada 1000 habitantes y condiciones habitacionales, las cuales son claramente inferiores a Cali y Medellín. Sin embargo, también se resalta que Barranquilla es la ciudad donde se presentan mejores niveles de empleabilidad entre migrantes y las más altas cifras de vocación de permanencia de migrantes.

Para hacer una comparación territorial acotada del contexto de cada ciudad, una de las principales variables contextuales para medir los niveles de pobreza es la pobreza monetaria, que ha fluctuado durante los últimos años en las principales ciudades del país a causa de la pandemia. Según el Banco Mundial, existen factores macroeconómicos como la depreciación del peso colombiano que han generado presiones inflacionarias que sobrepasan el 10%, las cuales afectan, en mayor medida, a los más vulnerables. Si bien 1,4 millones de personas lograron salir de la pobreza monetaria en 2021 —lo que representó 3,2 puntos porcentuales menos al 42,5% reportado por el DANE para 2020—, aún el 39,3% de personas viven con esa situación. Aunque estos niveles siguen siendo superiores a los reportados antes de la pandemia, en las cabeceras municipales el efecto de mejoría es más pronunciado, ya que se pasó de 42,4% a 37,8% en 2021. Frente a la pobreza extrema también se evidencia una contracción de 2,9 puntos porcentuales, al pasar de 15,1% en 2020 a 12,2% en 2021.

Los efectos de la recuperación económica tienen repercusiones directas en los índices de inclusión laboral en tanto que el contexto en el que están las personas condiciona los niveles de inclusión. Por ejemplo, de acuerdo con el informe del DANE “Análisis de las clases sociales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia 2019-2021” la tasa de ocupación de la clase alta es del 71,5% mientras que para los pobres es del 43,8%. Además,

las personas de clase alta tienen en promedio 3,6 años de educación superior adicionales a la clase baja. Esto tiene efectos directos en la tasa de ocupación, ya que quienes poseen este nivel educativo tienen 23,8% más de chance de estar ocupados en relación con quienes cuentan con un título de educación secundaria o inferior.

Lo que sucede con la tasa de ocupación también pasa en los índices de formalidad laboral. Para el caso de las clases altas, se reporta una informalidad del 17,3% para 2021, que contrasta con el 73,8% reportado para las clases bajas; además, se reportan brechas significativas entre la situación de hombres y mujeres. Esto afecta de manera directa la recuperación de la calidad de vida previa a la pandemia, donde la recuperación entre jefes del hogar se dio de manera más marcada entre clases altas (3,62 puntos porcentuales) que en las clases bajas (2,57 puntos porcentuales). Una situación que trae retos para el cierre de brechas de inequidad ya que, como se evidencia, la pandemia ha profundizado las desigualdades de los hogares que cuentan con capacidades asimétricas para sobreponerse a esta situación.

Para el caso de Medellín y su área metropolitana, 27,6% de los hogares reportan estar bajo la línea de pobreza monetaria. Este porcentaje es el menor entre las 23 ciudades de Colombia, seguido por el del área metropolitana de Cali, con el 29,3%. En cambio, Barranquilla —con el 35,7% de los hogares— ocupa el octavo lugar, aunque con un mejor desempeño que el promedio nacional. Frente al 2020, tanto Barranquilla como Cali redujeron en 7 y 5,5 puntos porcentuales la pobreza monetaria, magnitudes mayores a la de Medellín y el promedio nacional, cuya reducción fue de 5,3 puntos porcentuales y 3,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Otro de los aproximadores que permiten observar las condiciones económicas y de calidad de vida de las personas es el Índice de Pobreza Multi-

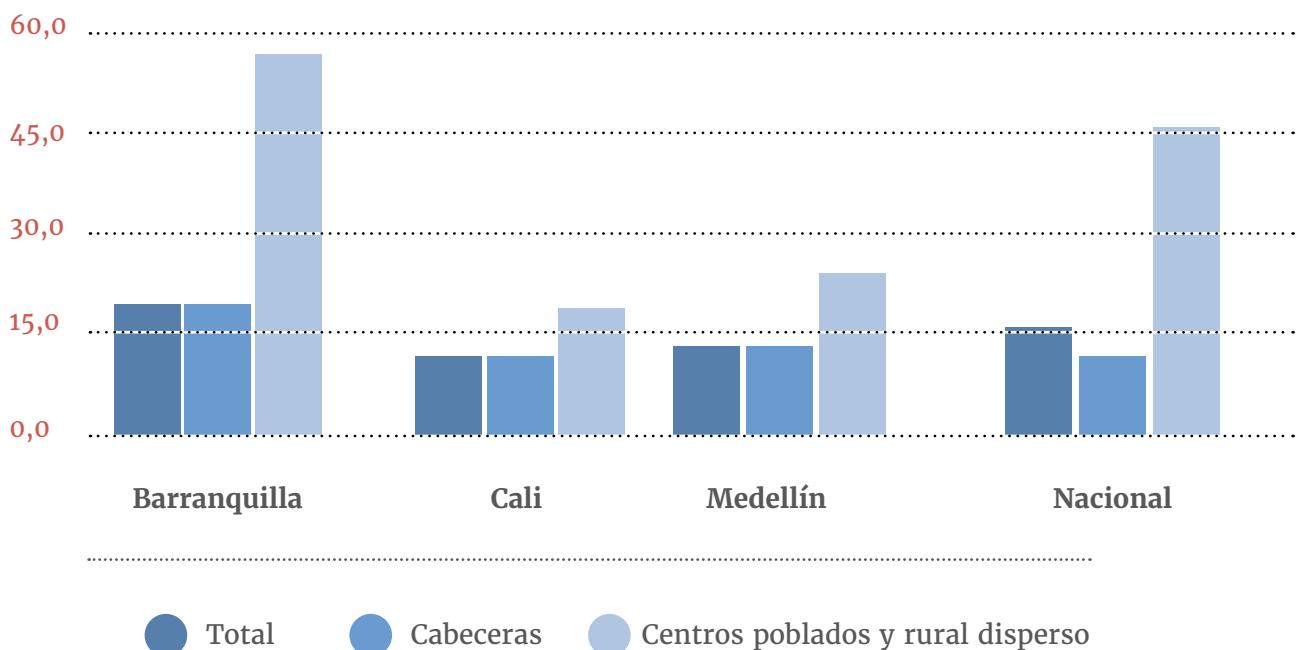
dimensional (IPM), una agregación de 15 indicadores dispuestos en cinco dimensiones, que reflejan exclusiones que pueden experimentarse de manera simultánea en un hogar, utilizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (Angulo et al., 2011).

En la dimensión de (1) trabajo se incluyen los indicadores de (1.1) desempleo de larga duración y (1.2) empleo formal. En la dimensión de (2) servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, se incluye el (2.1) acceso a fuentes de agua mejoradas,

(2.2) material inadecuado de pisos, (2.3) material inadecuado de paredes exteriores, (2.4) la inadecuada eliminación de excretas y (2.5) hacinamiento crítico. Frente a la dimensión de (3) salud se incluye la (3.1) tasa de aseguramiento en salud y (3.2) acceso al servicio dada una necesidad. Frente a las (4) condiciones educativas en el hogar se encuentran los indicadores de (4.1) logro educativo y (4.2) analfabetismo. Y en la dimensión de (5) condiciones de la niñez y juventud se incluye (5.1) la inasistencia escolar, (5.2) rezago escolar, (5.3) acceso a servicios para el cuidado a la primera infancia y (5.4) trabajo infantil.

Gráfico 1. Comparativo del Índice de Pobreza Multidimensional en 2021 en ciudades priorizadas (%)

Comparativo del índice de Pobreza Multidimencional en 2021 en ciudades priorizadas (%)



En la revisión de datos oficiales publicados por el DANE encontramos que, para 2021, había 2.157.774 personas con privaciones que incidían en el goce efectivo de derechos de manera integral. Eso significa una tasa de incidencia del 16% de hogares en el país, con expresiones diferenciadas entre los centros poblados y rurales dispersos (31,1%) y las cabeceras municipales (11,5%). Esta diferencia de 19,6 puntos porcentuales se explica por las capacidades que tienen las instituciones públicas para proveer bienes y servicios en los centros urbanos, en contraste con los retos que se tienen para hacerlo en la ruralidad, lo que genera retos para la garantía real de derechos de personas en zonas rurales del país.

En comparación con la media nacional, Cali (11,9%) y Medellín (12,8%) presentan tasas de incidencia de pobreza multidimensional que están por debajo del promedio, mientras que Barranquilla (17,4%) está 1,4 puntos porcentuales por encima de la media nacional. De igual manera, la brecha urbano-rural de pobreza multidimensional es inferior en Cali (5,3 puntos porcentuales) que en Medellín (9,3 puntos porcentuales) y Barranquilla (37,3 puntos porcentuales), aunque para esta última se reporta un número considerablemente inferior de personas viviendo en zona rural.

Una primera reflexión frente a los condicionantes contextuales que afectan los niveles de inclusión, así como la inclusión sociolaboral de poblaciones con vulnerabilidades para el acceso al empleo, está dada por su ubicación geográfica en cabeceras municipales o centros rurales y dispersos. Eso genera brechas de desigualdad urbano-rurales que incentivan la densificación de las ciudades. El fenómeno de urbanización de las ciudades en Colombia se ha intensificado desde el último cuarto del siglo XX. Según el informe del DANE de Patrones y Tendencias de la Transición Urbana en Colombia, una de las principales características de esta urbanización es la diferencia marcada entre el crecimiento de gran-

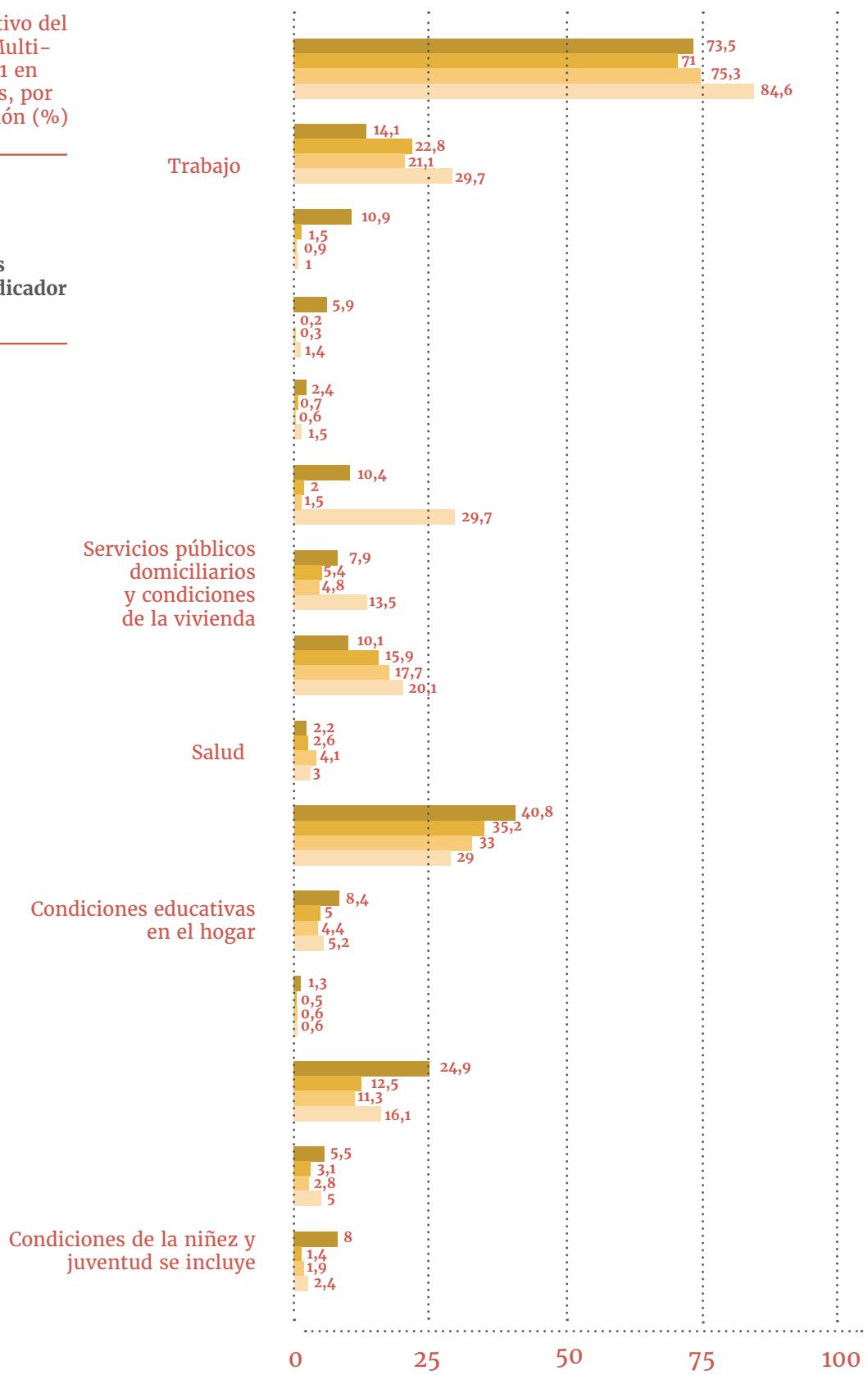
des ciudades en contraste con centros urbanos intermedios, que son hoy los lugares con crecimientos urbanos más acelerados. Sin embargo, esto también se da porque las ciudades principales de Colombia —aquellas que sobrepasan los 300.000 habitantes— ya reportaban porcentajes de urbanización por encima del 90%. En síntesis, Colombia vive un proceso de urbanización ambientado por amplias diferencias en la capacidad del Estado para hacer efectivo el goce material de derechos entre las zonas urbanas y zonas rurales del país.

Al hacer una revisión por dimensión de los indicadores que componen el IPM, encontramos que, en la mayoría de indicadores, las ciudades priorizadas para este informe presentan menores niveles de precariedad en comparación con el promedio nacional, salvo excepciones notables como la tasa de dependencia económica —que se mide como la razón entre el número de inactivos, desempleados y personas por fuera de edad laboral sobre el total de ocupados, el cual evidencia la carga económica que tienen los empleados respecto del resto de la población— y la ausencia de aseguramiento en salud, donde todas las ciudades de referencia sobrepasan la media.

Gráfico 2. Comparativo del Índice de Pobreza Multidimensional en 2021 en ciudades priorizadas, por indicador y dimensión (%)

Comparativo del índice de Pobreza Multidimensional en 2021 en ciudades priorizadas, por indicador y dimensión (%)

- Nacional
- Medellín
- Cali
- Barranquilla



En términos generales, Barranquilla reporta indicadores con mayores niveles de exclusión frente al goce efectivo de derechos comparándola con Cali y Medellín, ya que sobrepasa la media nacional en 6 de los 15 indicadores: la tasa de trabajo informal, tasa de dependencia económica, inadecuada eliminación de excretas (con una brecha significativamente más pronunciada que en el resto de indicadores), hacinamiento crítico, porcentaje de personas sin aseguramiento en el sistema de salud, y barreras de acceso al servicio de salud dada una necesidad.

Para el caso de Cali se encuentran cuatro indicadores con promedios superiores al nacional: trabajo informal, tasa de dependencia económica, porcentaje de personas sin aseguramiento en el sistema de salud y barreras de acceso al servicio de salud dada una necesidad. En el caso de Medellín, también son tres los reportes superiores a la media: los correspondientes a la dimensión de salud y la tasa de dependencia económica que, como se mencionó, evidencia la carga económica que tienen los empleados respecto del resto de la población.

Un índice que también puede servir de aproximador para caracterizar el contexto de las ciudades y que incide en la inclusión laboral, es el Índice de Confianza al Consumidor (ICC). Este índice otorga información relevante para el seguimiento al desarrollo económico en el corto plazo pues monitorea la disposición de consumo de los hogares y, en esa medida, se usa como aproximador para indicar la tendencia de consumo agregada. Esto lo hace siguiendo el argumento de que el consumo habilita el goce de derechos a partir de la adquisición de bienes y servicios que aportan al bienestar.⁴

Para el caso de Colombia, el Índice de Confianza al Consumidor es desarrollado por el DANE a partir

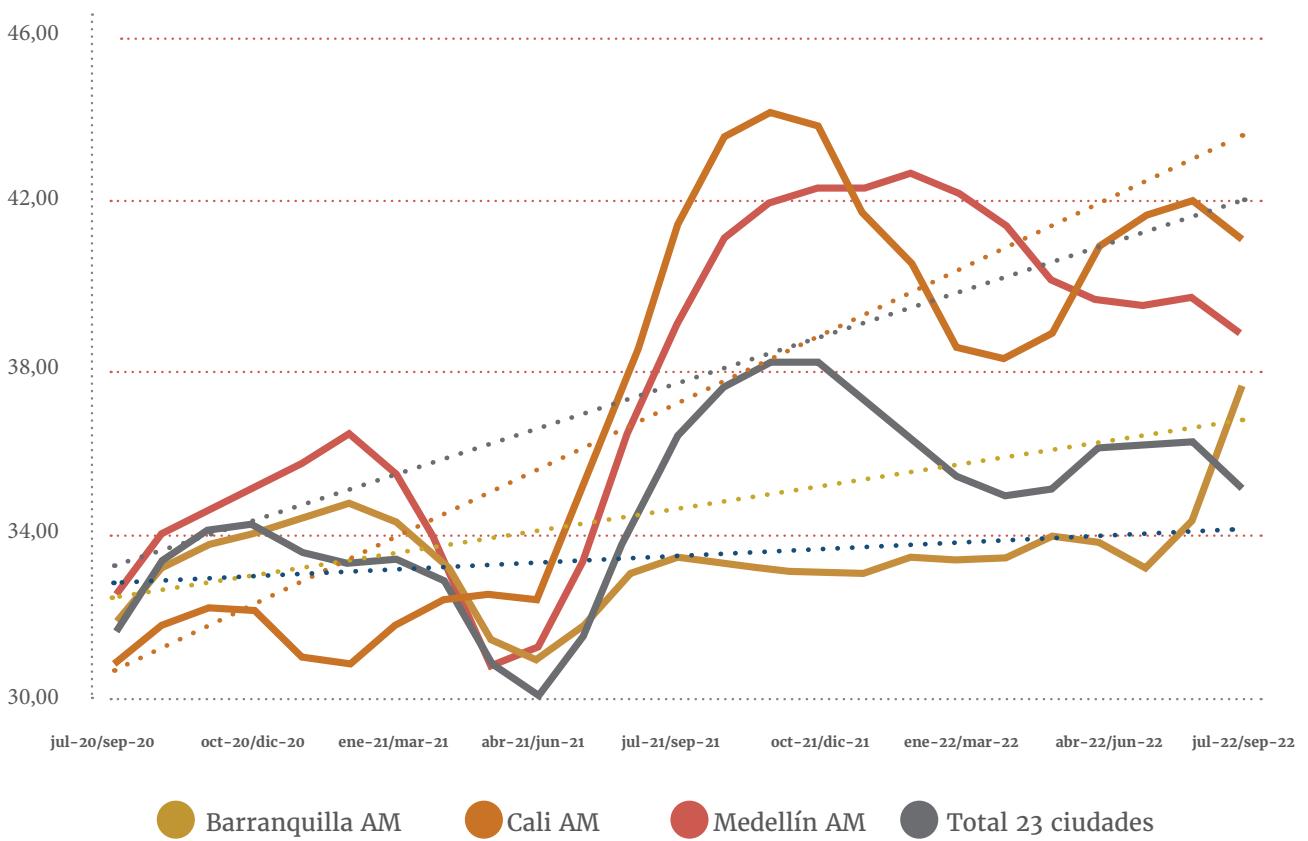
de los datos de la encuesta Pulso Social, que incluye cinco preguntas. El ICC se concluye luego de un promedio ponderado para cada pregunta: (1) ¿Cómo considera usted la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses? (2) ¿Cómo cree usted que será la situación económica de su hogar dentro de 12 meses comparada con la actual? (3) ¿Cómo considera hoy la situación económica del país comparada con la de hace 12 meses? (4) ¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la situación actual? Y (5) Comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿cómo considera las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de su hogar realicen compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?

El Gráfico 3 evidencia que las tres ciudades de referencia presentan mayores índices de confianza en comparación con la media nacional, pero con tendencias disímiles. Tanto para el caso de Cali como para el de Medellín se presentan tendencias decrecientes desde el trimestre móvil junio-agosto 2022 a julio-septiembre 2022, mientras que en el caso de Barranquilla se presenta un repunte de 1,83 puntos porcentuales entre mayo-julio 2022 y julio-septiembre 2022, que la sitúa por encima de la media nacional. Una situación que no sucedía desde el año inmediatamente anterior, en el trimestre mayo-julio 2021.

4. Deaton, A & Zaidi, S. (2002) Guidelines for constructing aggregates for welfare analysis. Washington DC: The World Bank.

Gráfico 3. Comparativo de Índice de Confianza al Consumidor (ICC) por trimestre 2020-2022

Comparativo de Índice de Confianza al Consumidor (ICC) por trimestre móvil 2020-2022



El gráfico es explícito en señalar las oscilaciones en la confianza de los consumidores durante los meses que siguieron a las cuarentenas preventivas obligatorias realizadas en los centros urbanos. Sin embargo, se perciben comportamientos diferenciados entre las ciudades: mientras en el caso de Medellín y Barranquilla se evidencian caídas sostenidas en los niveles de confianza desde el trimestre diciembre 2020-febrero 2021, Cali tiene un crecimiento moderado desde ese mismo trimestre hasta abril-junio 2021, donde repunta de manera vertiginosa siguiendo la tendencia de las otras ciudades, pero de manera más pronunciada hasta el trimestre septiembre-noviembre 2021.

Llama la atención que, si bien las curvas de las tres ciudades tienen momentos en los que se comportan

de manera similar, las variaciones trimestrales poseen magnitudes distintas y las líneas de tendencia del ICC también presentan diferencias. Eso indica cómo las diferencias contextuales inciden en el índice de confianza al consumidor para cada ciudad.

El caso de Barranquilla es el más ilustrativo: si bien se encuentran oscilaciones similares de descenso en el ICC entre diciembre-febrero de 2020 y abril-junio 2021 como en las otras ciudades, no tuvo una recuperación en el índice, como sucede en el caso de Cali y Medellín. Entre los trimestres de mayo-julio 2021 y octubre-diciembre 2021 ambas ciudades tuvieron una recuperación en el índice de confianza superior a 25 puntos porcentuales, mientras para Barranquilla fue solo de 6,5 puntos porcentuales. En contraste, parece tener un repun-

te durante las mediciones del segundo semestre de 2022, que no se evidencian en Medellín, Cali o el agregado de las 23 ciudades principales.

El Índice de Confianza al Consumidor es un aproximador que permite tomarles el pulso a las decisiones de consumo en las ciudades, y sirve para hacer seguimiento a los niveles de recuperación económica después de la pandemia del covid-19 partiendo de las percepciones de los consumidores. Si se evalúan las líneas de tendencia de las tres ciudades encontramos que, entre julio-septiembre de 2020 y julio-septiembre 2022, Cali y Medellín han tenido recuperaciones en la confianza de consumidores significativamente más pronunciadas que Barranquilla (incluso, con mejor desempeño que el total de las 23 ciudades principales).

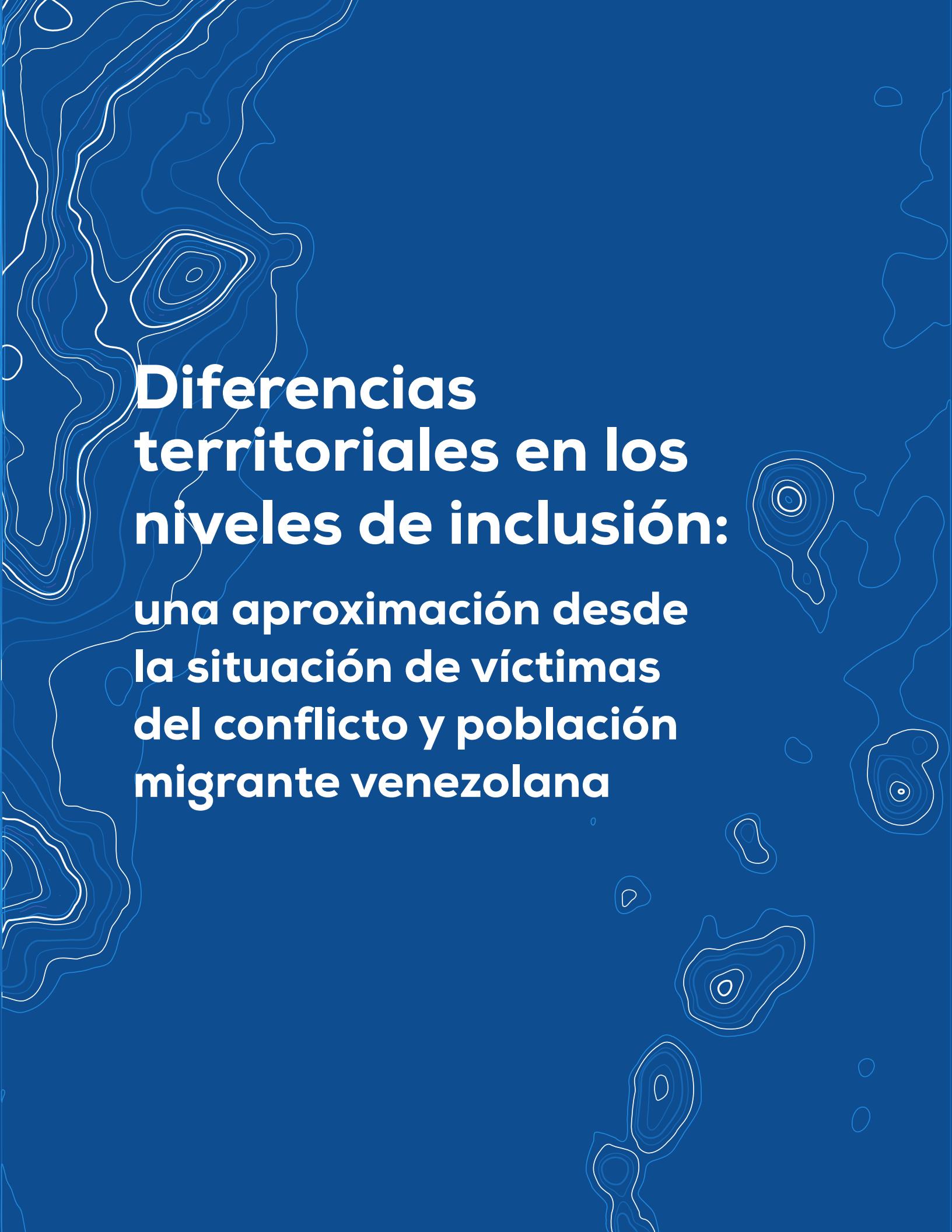
El ICC también permite hacer monitoreo inmediato de las expectativas en el consumo de las personas, algo que debe leerse de manera complementaria con la coyuntura de las ciudades. El estallido social del Paro Nacional sucedió en abril de 2021, momento que coincide con la mayor caída en las curvas de ICC. Vale la pena señalar el comportamiento de la confianza en Cali, ciudad con las mayores afectaciones del Paro entre las tres ciudades de referencia, y con mayor volatilidad en los índices de confianza reportados por los consumidores.

Tanto el indicador de pobreza monetaria como los índices de pobreza multidimensional y el Índice de Confianza al Consumo, permiten caracterizar las dinámicas contextuales de las ciudades que inciden en los niveles de inclusión laboral de poblaciones vulnerables para acceder al empleo. Para el caso de las mediciones de pobreza, se trata de mediciones anualizadas que muestran las condiciones de vida a partir de la habilitación al consumo de bienes y servicios y el goce material de derechos, mientras el ICC sirve

como termómetro de las expectativas al consumo que afectan directamente las perspectivas del mercado que tienen las empresas.

Visto en términos de pobreza monetaria, el 27% de las personas en Medellín, el 29,3% en Cali y el 35,7% en Barranquilla, son consideradas pobres. Esta situación, además, osciló de manera más pronunciada entre 2022 y 2021 para el caso de Cali y Barranquilla, indicio de las afectaciones diferenciadas luego de la pandemia del covid-19.

Si se toma la medida de pobreza multidimensional el panorama es similar: Cali y Medellín presentan niveles de pobreza alrededor del 12%, mientras en Barranquilla la cifra se eleva al 17,4%. En esa ciudad, además, se evidencian mayores niveles de exclusión frente al trabajo informal, tasa de dependencia económica, inadecuada eliminación de excretas, hacinamiento crítico y las relacionadas con el sistema de salud. Si se contrastan estos datos con el índice de confianza de los consumidores, el comportamiento se mantiene en cuanto el ICC es superior en Cali y Medellín sobre Barranquilla, lo que permite intuir relación entre ambas variables.



Diferencias territoriales en los niveles de inclusión: una aproximación desde la situación de víctimas del conflicto y población migrante venezolana

Diferencias territoriales en los niveles de inclusión: una aproximación desde la situación de víctimas del conflicto y población migración venezolana

Para caracterizar las diferencias contextuales que inciden en las percepciones de los empresarios sobre la empleabilidad de grupos vulnerables, también es pertinente una aproximación a las cifras globales de estas poblaciones por ciudad. El objetivo es revisar el panorama de inclusión en función de los retos para la atención de estas poblaciones a nivel territorial. Para el análisis, se prioriza la población víctima del conflicto y población migrante de origen venezolano en las ciudades de interés.

Población víctima del conflicto

Para el caso de la población víctima del conflicto armado encontramos que, según cifras suministradas por la Red Nacional de Información administrada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con corte al 31 de julio de 2022, en Colombia hay un total de 9.328.449 personas que han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado, después de solicitar la inscripción en el RUV por medio de la declaración de los hechos victimizantes en las agencias del ministerio público de la ciudad (Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo). De ellas, solo 7.504.883 cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley 1448 de 2011. No son sujetos de atención 1.917.786 debido a que son víctimas fallecidas, directas de desaparición forzada, homicidio y no activas para la atención.

Las cifras suministradas responden a los registros de la Red Nacional de Información, Entidades Territoriales y demás actores del Sistema Nacional

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), que tiene registros municipales actualizados con periodicidad bienal, con último corte a diciembre de 2021. La herramienta de medición incluye un módulo de seguimiento a la Superación de Situación de Vulnerabilidad, cuyo objetivo es la estabilización socioeconómica a partir de la evaluación de los criterios técnicos según la resolución 2200 de 2018, para la verificación del cumplimiento de los derechos de identificación, salud, atención psicosocial, educación, reunificación familiar, vivienda, generación de ingresos y alimentación.

Derecho a la identificación: Verifica que las personas tengan su documento de identidad acorde con la edad (registro civil antes de los siete años; después, tarjeta de identidad hasta los 18, y de ahí en adelante cédula de ciudadanía). La fuente utilizada para este derecho es la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC).

Derecho a la educación: Verifica los criterios de asistencia y permanencia. En este sentido, se valida que las personas entre cinco y 17 años se encuentren matriculadas en algún grado de educación formal de prescolar, primaria, secundaria y media. Para evaluar su permanencia se mira que el año anterior también hayan estado estudiando. Las personas que se encuentren por fuera de estos rangos no aplican para la medición de este derecho. La fuente usada para medirlo es el Sistema de Matrículas (SIMAT) del Ministerio de Educación.

Derecho a la salud: Verifica que las personas se encuentren afiliadas en algún régimen del Sistema General de Seguridad Social en salud. Las fuentes utilizadas son del Ministerio de Salud y de Protección Social.

Derecho a la Atención Psicosocial: Verifica si la persona ha solicitado atención o reha-

bilitación psicosocial, y si la ha recibido. Las fuentes utilizadas son: el Programa de Atención Psicosocial y Atención Integral en Salud (PAPSIVI) del Ministerio de Salud y Protección Social y las fuentes propias de la Unidad para las Víctimas (instrumentos de caracterización y Estrategia de Recuperación Emocional Individual y Grupal (EREG)).

Derecho a la reunificación familiar: Verifican dos criterios: el primero, si el hogar solicitó apoyo del Estado para reunificarse y logró dicha reunificación; para el segundo, se revisa si el hogar no ha solicitado apoyo del Estado para reunificarse en un periodo menor a dos años desde el último evento de desplazamiento forzado. La fuente son los instrumentos de caracterización de la Unidad para las Víctimas (se deben mencionar cifras de este derecho de acuerdo con el municipio de la solicitud).

Derecho a la alimentación: Verifican dos criterios: en el primero, que la persona cumpla con el derecho a la generación de ingresos; para el segundo, se valida que haga parte de un hogar cuya alimentación cumpla con los criterios de frecuencia y diversidad dietaria de acuerdo con la metodología del Programa Mundial de Alimentos sobre El Consumo Semanal Ponderado (Food Consumption Score, por sus siglas en inglés FCS). Las fuentes utilizadas son los instrumentos de caracterización propios de la Unidad para las Víctimas.

Derecho a la vivienda: Verifica que el hogar cumpla los criterios establecidos en la metodología para calcular el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) utilizada por el DANE y que algún miembro del hogar sea propietario con documento registrado, arrendatario con contrato verbal o escrito de la vivienda, o que

para la zona rural cuente con la sana posesión. La metodología IPM evalúa las siguientes características: A) Materiales adecuados, b) Acceso a servicios públicos básicos, y c) Espacio suficiente. Las fuentes consultadas para este derecho son las de: Subsidio y vivienda gratuita (vivienda urbana) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; subsidios para vivienda Secretaría de hábitat del Distrito; subsidios de vivienda del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, SISBÉN -DNP, UNIDOS -DPS, y los instrumentos de caracterización de la Unidad para las víctimas.

Derecho a la generación de ingresos: Verifican los ingresos promedio mensuales para los miembros de los hogares y se contrastan con las líneas de pobreza establecidas por el DANE. También si han recibido ofertas de programas para la generación de ingresos, empleabilidad, formación técnica, tecnológica y/o profesional, o cuenta con adjudicación de predios y participación en proyectos productivos. Las fuentes usadas para la medición son: CIFIN -ASOBANCARIA, PILA -MINSALUD, DECLARANTES -DIAN, programas de generación de ingresos de Prosperidad Social, proyectos productivos -URT, Líneas de acceso a créditos BANCOLDEX, Sofía Plus -SENA, Agencia Pública de Empleo – SENA, entre otras.

La situación de vulnerabilidad será considerada superada siempre que la víctima de desplazamiento forzado goce de los siete derechos o, al menos, de los siguientes: salud, educación, identificación y reunificación familiar, de acuerdo con los criterios anteriormente descritos, y pertenezca a un hogar cuyos ingresos mensuales sean superiores 1.5 veces al valor de la línea de pobreza estimada por el DANE vigente para el año de recolección de la información y el lugar de residencia del hogar.

La categoría “cumple” indica el número de personas que tienen un goce efectivo del derecho; “no aplica” para el número de víctimas a quienes por su condición (etaria o de vulneración) el derecho no aplica;

“no cumple” para las personas que no reportan goce efectivo del derecho; y “no definido”, para el caso en el cual se encuentran inconsistencias con el indicador.

Superación de situación de vulnerabilidad por parte de las víctimas de conflicto armado				
DERECHO (Situación)	BARRANQUILLA	CALI	MEDELLÍN	TOTAL
Alimentación				
Cumple	58,652	126,447	294,852	479,951
No aplica	0	0	0	0
No cumple	1,708	30,399	29,984	62,091
No definido	7,898	17,865	29,499	55,262
Educación				
Cumple	14,472	39,654	78,220	132,346
No aplica	52,469	129,544	269,452	451,465
No cumple	1,317	5,513	6,663	13,493
No definido	0	0	0	0
Generación de ingresos				
Cumple	43,689	104,106	253,268	401,063
No aplica	0	0	0	0
No cumple	15,813	44,820	65,745	126,378
No definido	8,756	25,785	35,322	69,863
Identificación				
Cumple	67,699	173,325	352,517	593,541
No aplica	0	0	0	0
No cumple	348	1,201	1,464	3,013
No definido	211	185	354	750

Superación de situación de vulnerabilidad por parte de las víctimas de conflicto armado				
DERECHO (Situación)	BARRANQUILLA	CALI	MEDELLÍN	TOTAL
Reunificación familiar				
Cumple	155	2,033	2,774	4,962
No aplica	68,046	171,720	350,743	590,509
No cumple	57	958	818	1,833
No definido	0	0	0	0
Salud				
Cumple	66,447	169,081	347,231	582,759
No aplica	0	0	0	451,465
No cumple	1,811	5,630	7,104	14,545
No definido	0	0	0	0
Vivienda				
Cumple	40,550	91,019	223,141	354,710
No aplica	0	0	0	0
No cumple	25,663	73,816	119,896	219,375
No definido	2,045	9,876	11,298	23,219
Atención psicosocial				
Cumple	8,898	32,391	32,274	73,563
No aplica	55,303	123,545	293,466	472,314
No cumple	4,057	18,775	28,595	51,427
No definido	0	0	0	0
Comparación de la superación de situación de vulnerabilidad (SSV)				
STATUS SSV	BARRANQUILLA	CALI	MEDELLÍN	TOTAL
Universo	68.258	174.711	354.335	7.504.883
Cumple	58.652 (85.9%)	126.447 (72.3%)	294.852 (83.21%)	5.707.854 (76%)
No cumple	1.708 (2.5%)	30.399 (17.4%)	29.499 (8.3%)	716.626 (9.5%)
No determinado	7.898 (11.5%)	17.865 (10.2%)	29.499 (8.46%)	1.080.403 (14.4%)

En los índices de superación de la situación de vulnerabilidad se encuentra que, de las 7.504.883 víctimas del conflicto sujetas de reparación a nivel nacional, el 76% cumple con las condiciones para que se considere la superación de situaciones de vulnerabilidad. A nivel de los municipios de interés para este documento, en Barranquilla el 85,9% cumple con las condiciones; en Medellín, el 83,2%, y en Cali el 72,3%. Importante resaltar que, en números totales, el universo de víctimas en Medellín duplica el número de registros en Cali y quintuplica los de Barranquilla, situación que genera presiones adicionales en las capacidades de instituciones competentes para priorizar a esta población.

Para los casos detallados de cada ciudad estudiada sobre el cumplimiento de los derechos referidos en la resolución 2200 de 2018, se pueden emitir múltiples conclusiones según los datos recaudados. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que el derecho a la educación, a la atención psicosocial y a la reunificación familiar, deben ser analizados en un renglón distinto ya que a mucha de la población víctima del conflicto no le aplica la medición de cumplimiento de estos derechos.

En términos generales encontramos que, para las tres ciudades de referencia, los asuntos relacionados con la generación de ingresos, acceso a vivienda y atención psicosocial son las variables donde se encuentran mayores niveles de exclusión, siguiendo la tendencia nacional.

Migrantes de origen venezolano

Para el análisis comparativo de las condiciones de inclusión de población migrante de origen venezolano recurrimos, principalmente, a los datos agregados en el tablero de control del Observa-

torio Colombiano de Migración desde Venezuela, una iniciativa para consolidar y visualizar los datos segmentados para esta población realizada por el Departamento Nacional de Planeación. También al tablero de control dispuesto por Migración Colombia para el seguimiento a los registros del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos y demás fuentes de información subsidiarias.

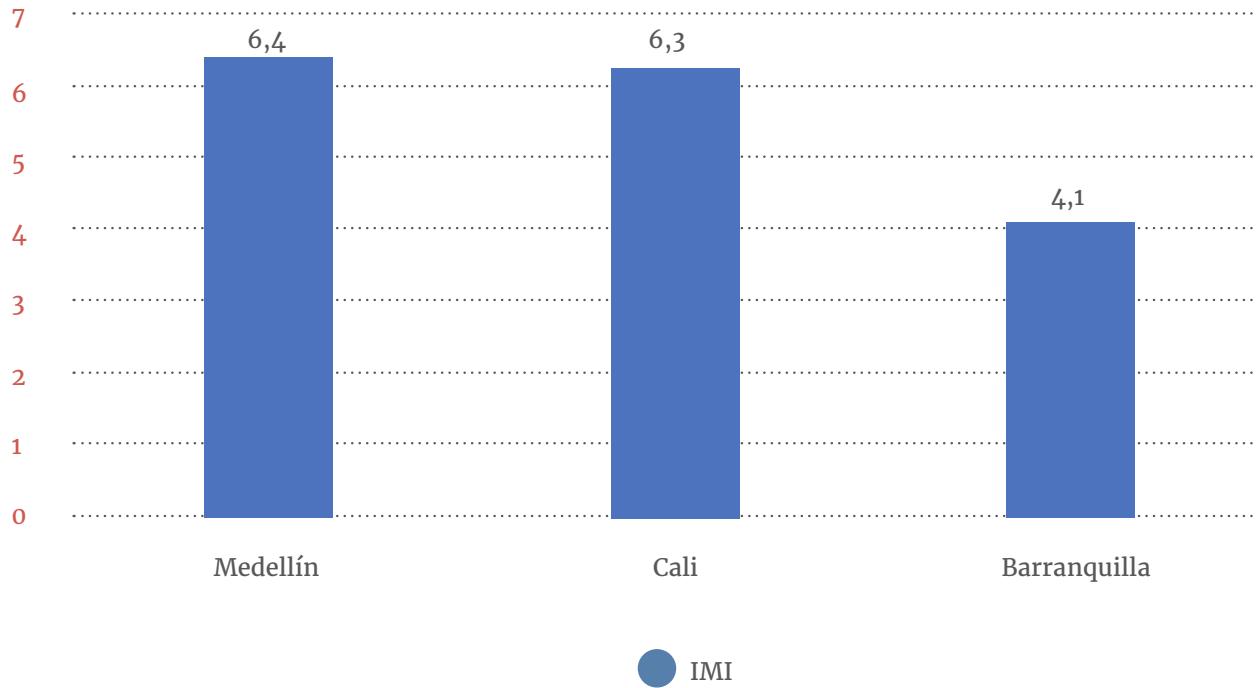
Como parte de la estrategia de visibilización de datos con enfoque migratorio en el país, el Observatorio de Migración Venezolana del DNP desarrolló el Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica de la población migrante venezolana en Colombia (IMI), como un aproximador para delimitar los niveles de integración socioeconómica de migrantes de origen venezolano con vocación de permanencia en el país. El índice, de seguimiento semestral, se compone de 36 indicadores agregados, 11 subdimensiones (pobreza e ingresos, servicios públicos y condiciones habitacionales, salud, educación y niñez; percepción y satisfacción con la vida, mercado laboral, permanencia en el territorio; participación ciudadana, discriminación y convivencia; fortalecimiento institucional territorial y regularización) que, a su vez, se clasifican en cuatro dimensiones (cobertura de necesidades básicas, integración económica, integración social, regularización e institucionalidad pública).

El índice califica municipios y departamentos de manera agregada asignándoles un puntaje entre 0 y 10, donde 10 es la máxima calificación posible frente a los niveles de integración territorial de migrantes. El nivel inicial va de 0 a 4; el básico, de 4 a 5; aceptable, de 5 a 6; y avanzado, de 6 en adelante. Esos rangos son elegidos de manera instrumental para segmentar el 25% de cada departamento en una de las categorías y se insiste en que se conserve este lineamiento técnico para posteriores actualizaciones al seguimiento.

Al evaluar el índice de manera global encontramos que Medellín y Cali encabezan el listado de ciudades con mayores niveles de integración,

mientras que Barranquilla se encuentra en el puesto 18, de acuerdo con el orden de puntajes establecido por el Observatorio¹.

Gráfico 4 Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica en Barranquilla, Cali y Medellín



De acuerdo con la clasificación de niveles propuesta, tanto Medellín como Cali se encuentran en niveles avanzados de integración con todas las dimensiones, reportando niveles superiores al promedio nacional. Lo contrario sucede con Barranquilla, que tiene un nivel básico de integración y que reporta niveles inferiores a los promedios nacionales, solo igualándose en la dimensión de regularización e institucionalidad.

La primera barrera que enfrentan los migrantes para gozar efectivamente de sus derechos radica en la capacidad legal que tienen en el país. Esto se debe a la llegada masiva de personas que han cruzado la

frontera de manera irregular y, por lo tanto, no tienen su situación migratoria resuelta. Esta situación resulta un obstáculo para el desarrollo de un proyecto de vida en Colombia: desde el acceso a la oferta pública institucional del Estado colombiano, hasta la existencia jurídica para suscribir contratos y tener propiedades. El ETPV es la principal política para integrar a la población migrante de origen venezolano reconociendo su derecho al refugio.

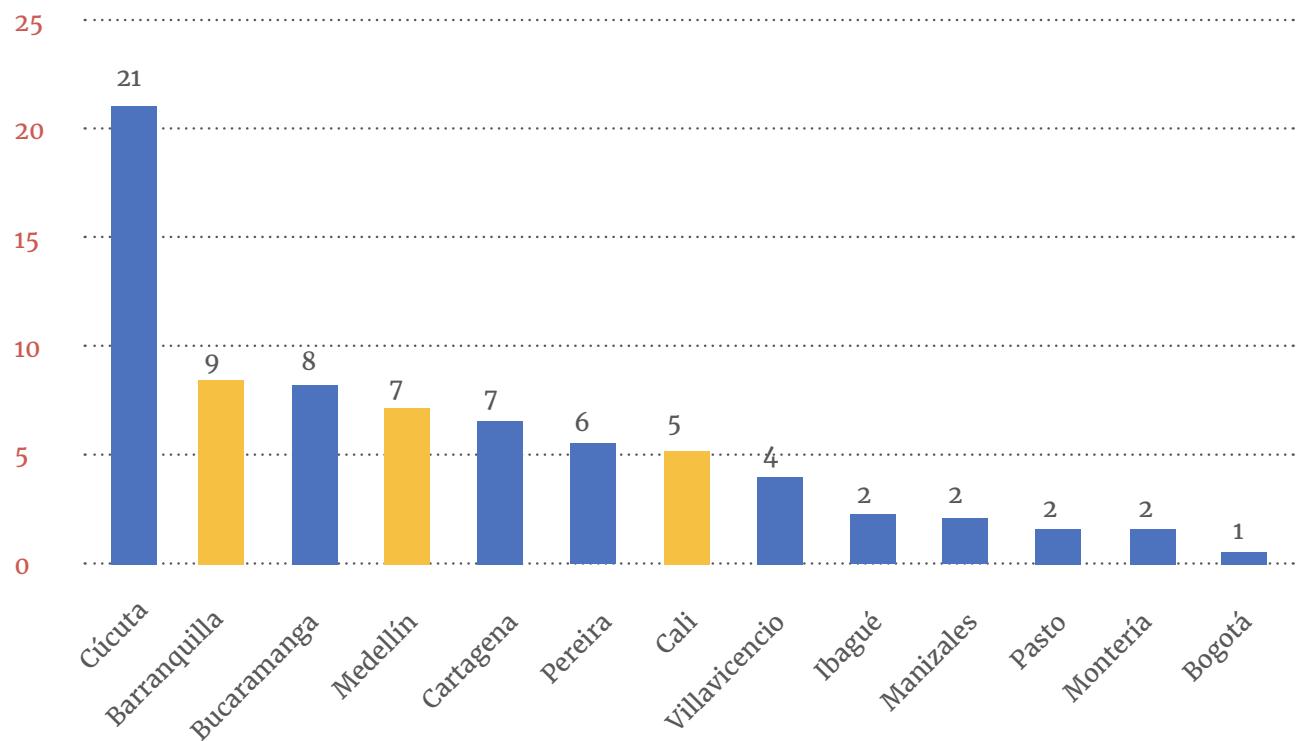
Con corte de agosto 2022, según datos de Migración Colombia, hay un total nacional de 2.453.570 migrantes y retornados con el Formulario de Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) dili-

genciado, el paso inicial para acceder al Permiso por Protección Temporal. De ellos, el 78,9% ya han terminado el registro biométrico —el segundo paso— y se han aprobado 1.552.442 permisos temporales (PPT); es decir, el 63,2% del total de solicitantes inscritos en el RUMV.

La agregación de datos a nivel departamental suministrada por Migración Colombia, con corte a agosto de 2022, muestra que, del total de preregis-

tos del ETPV, el 13,8% está en Antioquia; el 8,8% en Valle del Cauca; y el 6,7% en Atlántico, con distribuciones que siguen la tendencia de la media de migración en el país: de manera proporcional entre hombres y mujeres (salvo en Atlántico, donde se presenta una superioridad del 9% de mujeres sobre hombres). En los tres departamentos, además, se encuentra prevalencia de jóvenes migrantes entre 18 y 29 años sobre el resto de distribución etaria.

Gráfico 5. Proporción de migrantes por número de habitantes en 13 ciudades principales de Colombia (%)



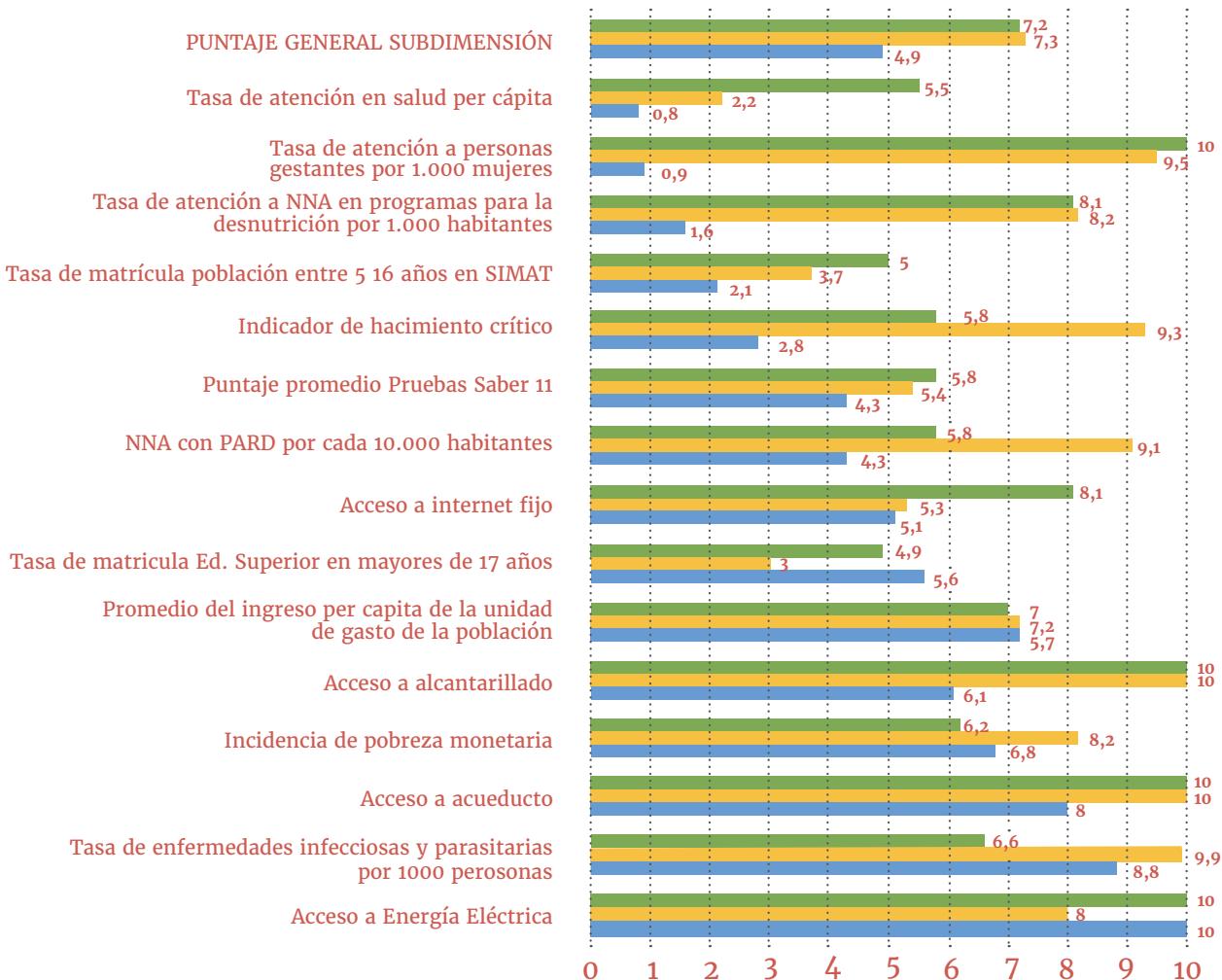
Para obtener observaciones municipales recurrimos al informe de Migración Colombia sobre la distribución de venezolanos en el país, con corte a febrero de 2022. Allí se muestra que, entre las ciudades de interés, Medellín es la que mayor número de migrantes con RUMV reporta (190.854), seguida

de Cali (121.837) y Barranquilla (112.895). Sin embargo, para realizar una lectura ponderada según el contexto, vale la pena mirar el cálculo de proporción de migrantes por número de habitantes en las 13 ciudades principales de Colombia:

Gráfico 6. Subdimensión de necesidades básicas índice IMI

Subdimensión de cobertura necesidades básicas

● Medellín ● Cali ● Barranquilla



Para realizar el cálculo se toma como fuente la base de datos Proyecciones de población a nivel municipal periodo 2018–2035 del DANE . Ese análisis muestra que, en contraste con el análisis de conteo, Barranquilla es la segunda ciudad con mayor proporción de migrantes por número de habitantes (9%), solo superada por Cúcuta. Luego se encuentra Medellín (7%), superada por Bucaramanga y Cali (5%), después de Cartagena y Pereira. Esto podría tener impactos en la provisión de bienes y servicios públicos dada la presión sobre las capacidades institucionales en las ciudades, ya que la brecha entre los puntajes generales de la subdimensión de cobertura en necesidades básicas del IMI otorga un puntaje general de 7,2 a Medellín y 7,3 a Cali, mientras que a Barranquilla un 4,9; es decir, más de tres puntos porcentuales de diferencia en el agregado.

La brecha más significativa entre Barranquilla con respecto a Cali y Medellín se presenta en la tasa de atención a personas gestantes por cada 1000 mujeres: Medellín (10) y Cali (9,5) sobrepasan a Barranquilla (0,9) considerablemente. Esta situación se replica para los otros indicadores asociados a la salud pública con excepción de la tasa de enfermedades infecciosas y parasitarias por 1.000 personas: Cali (9,9) y Barranquilla (8,8) superan el puntaje de Medellín (6,6). Para el caso de la atención a niños, niñas y adolescentes (NNA) en programas para la desnutrición por cada 1.000 personas también se encuentra otra brecha significativa entre los puntajes de Cali (8,2) y Medellín (8,1) con respecto a Barranquilla (1,6). La tasa de atención a salud per cápita reporta asimetrías entre las ciudades priorizadas, con un puntaje de 5,5 para Medellín, 2,2 para Cali y 0,8 para Barranquilla.

En la educación de niños, niñas y adolescentes es donde menos asimetrías se presentan entre las ciudades priorizadas. En la evaluación de tasa de matrículas de población entre 5 y 16 años en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT), Medellín ocupa el primer lugar en términos de cobertura (5), seguida de Cali (3,7) y Barranquilla (2,1). En

educación superior la situación cambia, ya que la evaluación de tasa de matriculados mayores de 17 años puntúa a Barranquilla en primer lugar (5,6), seguida de Medellín (4,9) y Cali (3).

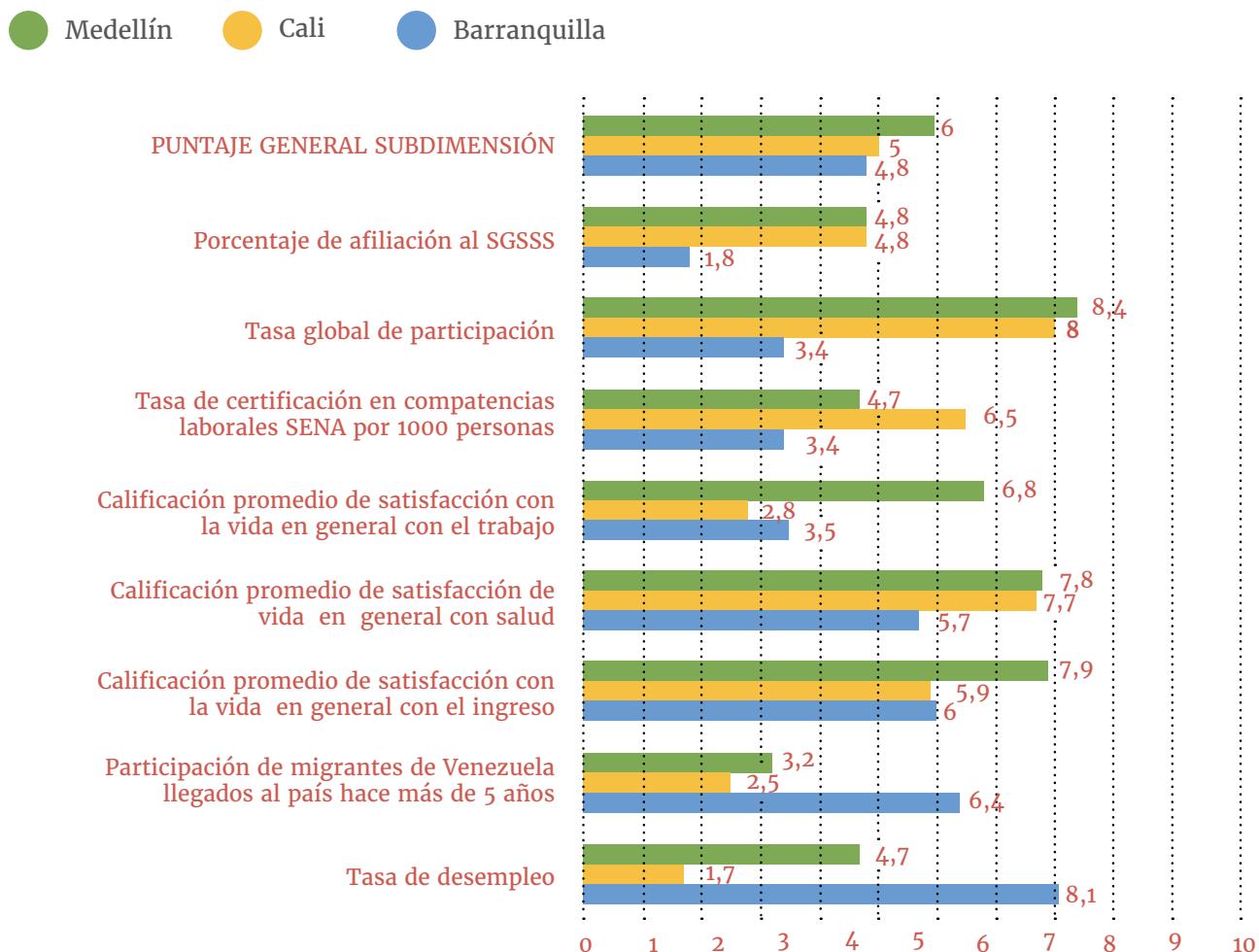
Para el caso de la variable puntaje promedio en las Pruebas Saber 11 se encuentran cercanía entre Medellín (5,8) y Cali (5,4), y una diferencia de más de un punto del índice con Barranquilla (4,3). Y, finalmente, está la variable de niños, niñas y adolescentes con un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) activo, donde Cali (9,1) supera en amplia medida los puntajes de Medellín (5,8) y Barranquilla (4,3).

Frente a los indicadores de pobreza e ingreso, Cali tiene la calificación que evidencia mejor desempeño: es el puntaje que más se aproxima a la máxima calificación de 10. Para el caso de la variable de incidencia de pobreza monetaria, Cali ocupa el mejor puntaje reportado (8,2), seguida de Barranquilla (6,8) y Medellín (6,2). Desde el promedio del ingreso per cápita de la unidad del gasto de la población se encuentra Cali (7,2), seguida de Medellín (7) y Barranquilla (5,7).

Finalmente, los indicadores de servicios públicos y condiciones habitacionales marcan la tendencia de Medellín como la ciudad que mejor puntaje recibe en el agregado, con excepción del indicador de hacinamiento crítico, donde Cali (9,1) supera ampliamente a Medellín (5,8) y Barranquilla (2,8). Frente al acceso a internet fijo, Medellín reporta el puntaje más alto de cobertura (8,1), seguida de Cali (5,3) y Barranquilla (5,1). Caso particular sucede para los indicadores de prestación de servicio de acueducto y alcantarillado, donde tanto Medellín como Cali son calificadas con el máximo puntaje (10), mientras que Barranquilla recibe un puntaje de 6,1 para alcantarillado y 8 para acueducto. De manera análoga sucede con los servicios de energía eléctrica, donde Medellín y Barranquilla reciben el máximo puntaje, y Cali está 20 puntos porcentuales por debajo de este puntaje.

Gráfico 7. Subdimensión de inclusión económica índice IMI

Subdimensión de inclusión económica



De acuerdo con las cifras de la encuesta Pulso de la Migración del DANE en su ronda número 3 (enero-febrero de 2022), el 84,6% de los migrantes de origen venezolano no tenían aún el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Eso constituye la primera barrera de inclusión laboral y productiva de la población. Esta cifra, además, se encuentra reflejada en la encuesta de percepciones del sector empresarial

frente al fenómeno migratorio realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Konrad Adenauer (2021), que encontró que el 47% de los empresarios del país consideran que la primera barrera para emplear migrantes está asociada a la falta de documentación requerida para acceder a un empleo formal, procedimiento en el cual el PEP es requisito indispensable. No obstante, de acuerdo con

los resultados de la encuesta, solo el 7% de los empresarios encuestados no conocía el ETPV.

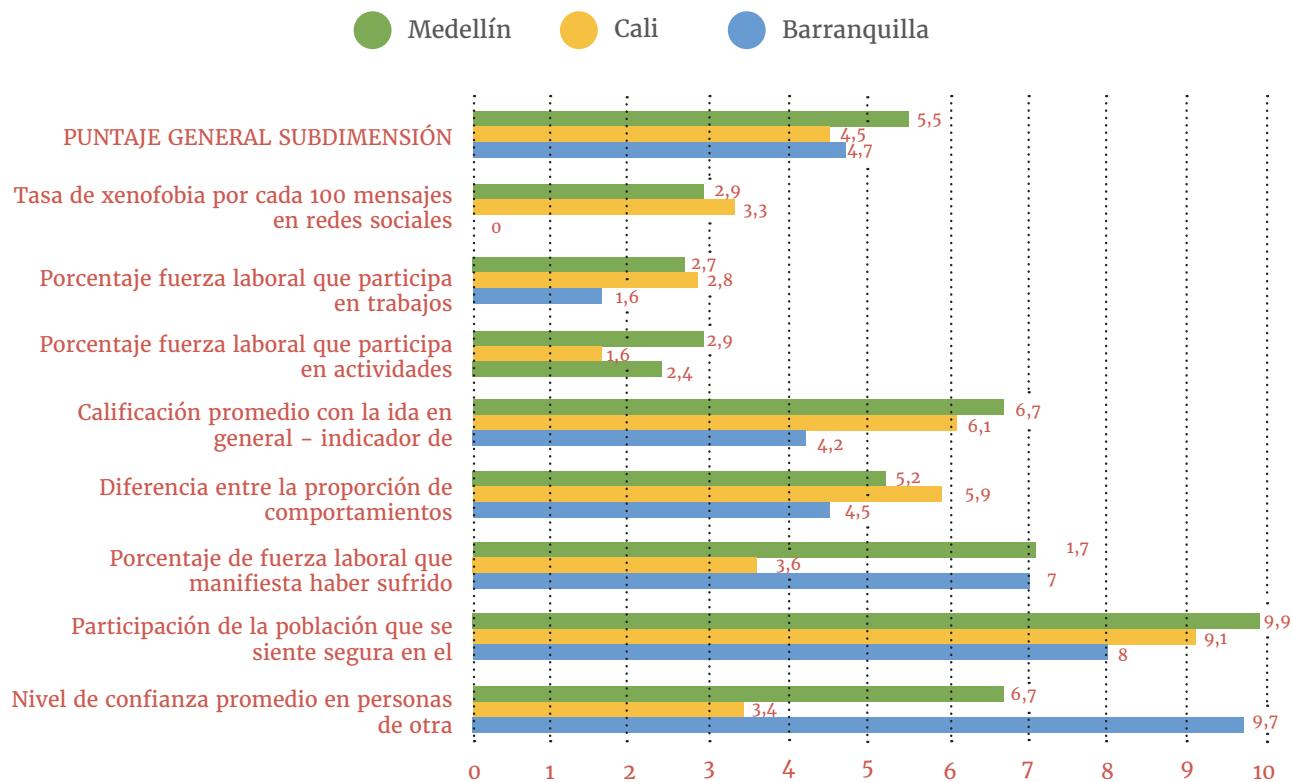
La dimensión de inclusión económica del IMI está integrada por los subdimensiones de mercado laboral, percepción de satisfacción con la vida y permanencia en el territorio. En términos generales, se reportan puntajes similares entre las ciudades priorizadas, donde Medellín (6) es seguida por Cali (5) y Barranquilla (4,8).

Para el caso de la subdimensión de mercado laboral, Barranquilla reporta el mejor desempeño en cuanto a su tasa de desempleo (8,1) que obtiene mejor punta-

je que Medellín (4,7) y supera en 79 puntos porcentuales a Cali (1,7). Caso opuesto sucede con la tasa global de participación, donde Medellín (8,4) y Cali (8) superan a Barranquilla (3,4) con más del doble de puntaje. Además, la tasa de certificación en competencias laborales del SENA por cada 1000 personas tiene resultados disímiles: el primer lugar lo ocupa Cali (6,3), seguida de Medellín (4,7) y Barranquilla (2,8). En el registro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se encuentran Cali y Medellín con la misma puntuación (4,8), mientras que Barranquilla se le otorga 1,8 en el índice.

Gráfico 8. Subdimensión de inclusión social índice IMI

Subdimensión de integración social



En lo que corresponde a la calificación de satisfacción de migrantes, encontramos que, para las tres variables utilizadas, se le otorga la mejor calificación a Medellín. Para el caso de la satisfacción hacia el trabajo está Medellín (6,8), seguida de Barranquilla (3,5) y Cali (2,8). Frente a la salud, Medellín (7,8), Cali (7,7) y Barranquilla 5,7. Y en cuanto a los ingresos, Medellín (7,9), Barranquilla (6) y Cali (5,9).

Frente a la subdimensión de permanencia en el territorio se cuenta con el indicador de participación de migrantes de Venezuela llegados al país hace más de cinco años. Aquí, Barranquilla tiene un puntaje ampliamente superior al de las ciudades de referencia (8,1) seguida de Medellín (4,7) y Cali (3,7).

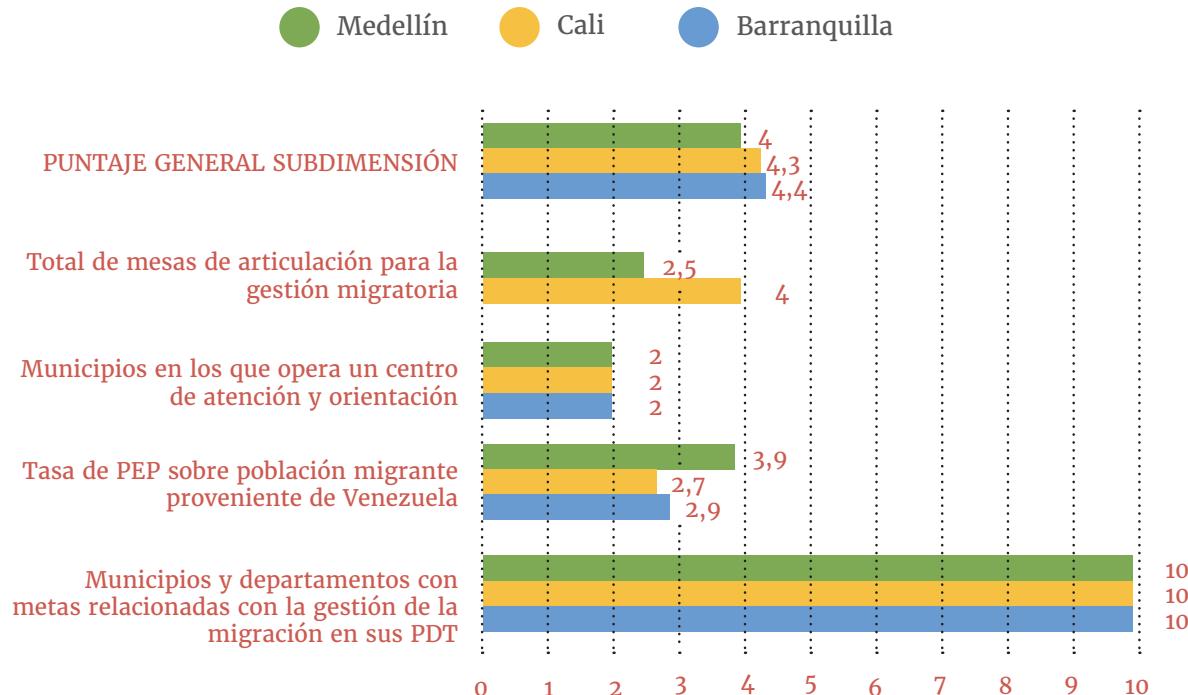
La dimensión de integración social está compuesta por las subdimensiones de participación ciudadana y discriminación y convivencia. En el comparativo de

ciudades de interés, encontramos que Medellín tiene asignado un puntaje superior (5,5) que Barranquilla (4,7) y Cali (4,5). Para la subdimensión de participación ciudadana se encuentran los indicadores de calificación promedio de satisfacción con la vida en general, el porcentaje de fuerza laboral que participa en actividades físicas sociales comunitales o de trabajo voluntario, y porcentaje de fuerza laboral que participa en trabajos comunitarios o voluntarios.

La dimensión de regularización e institucionalidad se subdivide en el fortalecimiento institucional territorial y la subdimensión de regularización. Esta última se compone de la variable Tasa de PEP sobre población migrante proveniente de Venezuela; en ella, Medellín (3,9) recibe un puntaje superior a Barranquilla (2,9) y Cali (2,7). Aunque Medellín ha avanzado más en la regularización de la población migrante, sigue siendo un reto al igual que en el resto del país.

Gráfico 9. Subdimensión de regularización e institucionalidad índice IMI

Subdimensión de Regulación e Institudacionalidad



Frente a la subdimensión de fortalecimiento institucional territorial, los tres municipios de referencia tienen la máxima calificación (10) en cuanto a la evidencia de metas relacionadas con la gestión de la migración en sus planes de desarrollo. Algo similar sucede con la variable de operación de un centro de atención y orientación, donde las tres ciudades reciben el mismo puntaje (2).

Otra cosa sucede con la variable de total de mesas de articulación para la gestión migratoria, donde Barranquilla (4) y Cali (2,5) superan ampliamente el puntaje de Medellín (0). En el agregado de la dimensión, Barranquilla recibe un puntaje de 4,4, seguido de Cali (4,3) y Medellín (4).

Al comparar las cifras de las subdimensiones del IMI aquí descritas, vale la pena resaltar cómo persisten brechas en el acceso a derechos en Barranquilla en contraste con Cali y Medellín, sobre todo en lo que se refiere a la atención a personas gestantes por 1.000 mujeres, desnutrición por cada 1.000 habitantes y condiciones habitacionales. Sin embargo, hay que resaltar que Barranquilla es la ciudad donde se presentan mejores niveles de empleabilidad entre migrantes y las más altas cifras de vocación de permanencia de migrantes.

A modo de conclusión, podemos decir que, desde las cifras de contexto económico aquí presentadas (pobreza monetaria, IPM, ICC), y los niveles de goce

efectivo de derechos de población migrante y víctima del conflicto a partir del índice de superación de situación de vulnerabilidad (SSV) y el Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica de la población migrante venezolana en Colombia (IMI), presentan la misma tendencia: Barranquilla se encuentra rezagada frente a las condiciones de pobreza y garantía material de derechos de poblaciones vulnerables.

También llama la atención la proporción de migrantes y víctimas del conflicto asentadas en Medellín, de la que se esperarían presiones en el sistema de atención para el goce efectivo de derechos que les afecten de manera negativa, pero no sucede de esa manera. Para el caso de Cali se observan niveles cercanos a la media nacional en el goce de derechos de población migrante y víctima del conflicto.

En ese sentido, el contexto resulta relevante en la reflexión sobre la inclusión en cuanto las decisiones de los actores se dan en un lugar y momento determinados por condiciones como la inequidad, acceso a servicios básicos, educación o las percepciones sobre el consumo de las personas, por mencionar algunas. La revisión aquí propuesta se complementa con el seguimiento de las percepciones empresariales frente a la inclusión de poblaciones vulnerables para complejizar el análisis sobre los condicionantes que inciden en la inclusión sociolaboral de las poblaciones vulnerables.



La percepción del sector empresarial sobre la inclusión

La percepción del sector empresarial sobre la inclusión

El sector empresarial es protagonista a la hora de generar condiciones para que la inclusión en el país se produzca de manera efectiva ya que, como se mencionó, este sector es un dinamizador de la economía. Aunque no de manera exclusiva, sí lo es a través de la generación de empleo en la medida que el efecto de derrama económica permite el consumo de bienes y servicios por parte de los hogares. En sociedades de mercado esto significa que la garantía material de derechos está habilitada por el consumo, donde el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones propicias para que la mayor cantidad de personas puedan acceder al mercado laboral con este propósito, así como de proveer bienes y servicios públicos para que la garantía material sea posible en aquellos individuos que están excluidos del goce efectivo de derechos.

Se debe tener presente que el mercado del trabajo es, como cualquier mercado, una interacción entre la demanda de necesidades de las empresas por mano de obra y el stock de personas que ofrecen su trabajo y compiten entre sí para ello. En un mercado laboral eficiente, los individuos con mayores aptitudes para trabajar deberían ser contratados. No obstante, el Estado ha reconocido que el acceso al empleo de poblaciones con vulnerabilidades —como el caso de las personas con discapacidad, excombatientes o con una identidad sexual diversa, entre otras— se ve truncado por su propia condición. Es por eso que, actualmente, el Estado reconoce que está llamado a generar acciones afirmativas para la promoción de políticas de empleo inclusivo. Por su parte, el conjunto del sector empresarial asume cada vez más que debe participar activamente en ese propósito.

Como parte de la agenda de trabajo, este año la FIP y la KAS propiciamos espacios de conversación para conocer las percepciones del sector empresa-

rial sobre la inclusión en Barranquilla, Cali y Medellín. Estas conversaciones giraron alrededor de dos preguntas orientadoras: ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de incluir?, y ¿qué acciones debe realizar una empresa para incluir? Reunimos las principales conclusiones de estos espacios de conversación.

Entre los consensos que encontramos en el sector empresarial la inclusión depende, en gran medida, de la motivación y la voluntad que tenga la empresa. Es un hito importante que hoy en día las empresas en Colombia apuesten por tener a la inclusión dentro de sus objetivos estratégicos y en su responsabilidad social, como un eje programático que beneficia sus operaciones.

Para los empresarios asistentes a los encuentros, la inclusión debe empezar por un propósito específico que debe estar determinado por las necesidades y características del entorno y la población que allí habita. Por eso, es responsabilidad de las empresas conocer sus entornos; es decir, identificar las limitaciones y oportunidades que existen, tanto internas como externas, para poder tener procesos de inclusión que den resultados positivos.

Para las empresas es también importante recibir acompañamiento en los procesos de inclusión. Por lo tanto, más allá de las acciones específicas que puedan realizar, es mucho más eficaz si estos esfuerzos hacen parte de una cadena más amplia de iniciativas y acciones públicas. La complementariedad de iniciativas y la articulación de diferentes actores como las entidades públicas territoriales, empresas privadas, las ONG, la academia, las comunidades y las juntas de acción comunal, son dos aspectos que los empresarios consideran relevantes para incluir a estas poblaciones.

Según los hallazgos de los encuentros, para los empresarios lograr procesos efectivos de inclusión pasa por una articulación entre el sector empresa-

rial, la institucionalidad y las políticas públicas. En el ámbito de la inclusión laboral, es importante para este sector que las políticas públicas garanticen que las personas puedan integrarse al mercado laboral de manera oportuna y eficiente.

Pero no solo la inclusión laboral emerge como una de las grandes preocupaciones, sino también el entender que en la ciudad existen diversas comunidades que, desde un aspecto de las relaciones sociales (dimensión relacional), el sector empresarial debe apostar por una mayor cohesión, para lo cual es necesario cambiar los prejuicios y estereotipos que existen alrededor de las poblaciones. En este aspecto, según los participantes de los encuentros, es responsabilidad de las empresas evitar criterios socioculturales que limiten el acceso de una persona a una vacante. En muchas ocasiones existen prejuicios que limitan que las personas, independientemente de su diversidad, puedan acceder a un empleo.

Cuando les preguntamos cuáles son las acciones que las empresas debe hacer para ser más inclusivas, los participantes estuvieron de acuerdo en que, desde el sector empresarial, es importante brindar ofertas laborales amplias para todo grupo poblacional y adoptar estrategias de empleabilidad flexibles con las necesidades del entorno. Para ello, la empresa debe tener un acercamiento constante con el entorno y las personas que allí habitan.

En un entorno como el colombiano generar un proceso de inclusión es, en sí mismo, un compromiso con el cambio y la transformación social. Por lo tanto, una empresa inclusiva es la que ayuda al desarrollo —reducir brechas de inequidad, por ejemplo— y transformación del entorno, generando empleo, inversión y otras acciones necesarias para el desarrollo territorial y humano.

A nivel interno de las empresas, incluir pasa por generar estrategias para que la persona que entra a

formar parte de su equipo conozca las culturas empresariales. Eso garantiza una transición amigable para el desarrollo laboral de las personas dentro de la compañía. En esta transición, también es importante que las personas vinculadas tengan la comodidad de ser incluidos desde la diversidad; es decir, reconocer todas las poblaciones y trabajar en pro de ellas, contando con sus habilidades.

Desde el sector empresarial colombiano se han adelantado acciones afirmativas para la inclusión laboral de población vulnerable. Existen esfuerzos empresariales de toda clase para incluir grupos poblacionales con amplias brechas para el acceso a empleo, que nacen tanto de la voluntad de las empresas para trabajar en función de este objetivo como del diseño normativo de disposiciones en materia laboral, que incentivan y protegen a poblaciones vulnerables en el acceso al empleo. Se destaca, entre otros, la Alianza por la Inclusión Laboral liderada por la Fundación Andi y Fundación Corona, que hace seguimiento anual a partir de los Informes Nacionales de Empleo Inclusivo (INEI) y tiene amplia trayectoria en la publicación de guías para promocionar el empleo inclusivo en poblaciones vulnerables como los migrantes (Andi, 2020) y discapacidad (Andi, 2019). También el sello de empresas Incluyentes (2022), una iniciativa que promueve la inclusión empresarial como un factor de competitividad de las compañías, y el sello de equidad laboral EQUIPARES, un programa de certificación del ministerio del trabajo para adoptar políticas de empleo inclusivas con enfoque de género.

La diversidad de iniciativas del sector empresarial para promover políticas de empleo inclusivo contrasta con la poca información representativa frente a sus percepciones y expectativas sobre la inclusión laboral de población vulnerable. A continuación, hacemos un repaso por las principales mediciones que existen en Colombia con respecto a las percepciones del sector empresarial hacia la población sujeta de inclusión la-

boral, con el ánimo de que alimentar la conversación sobre la importancia de conocer, a partir de un muestreo representativo, las expectativas de tomadores de decisión frente a la contratación de personas vulnerables en el acceso a empleo, caracterizando las narrativas en el sector que permitan identificar barreras para la contratación y, sobre eso, generar recomendaciones de acción para el cambio.

Para profundizar en la reflexión sobre los factores que inciden en las percepciones del sector empresarial frente a la vinculación laboral de poblaciones vulnerables al acceso a empleo, hicimos un análisis de los datos proporcionados en la encuesta de la investigación “Entendiendo la Mirada Empresarial Frente al Fenómeno Migratorio en Colombia”, realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Konrad Adenauer para caracterizar las barreras de contratación percibidas frente a la inclusión de población migrante en el país. Es el primer estudio de estas características realizado hacia esa población. A su vez, dicho estudio tomó como referente el sondeo realizado por la Fundación Ideas para la Paz y el Proyecto Migración Venezuela de Revista Semana (2020) en un contexto en el cual aún no se hablaba de la regularización masiva de población migrante de origen venezolano en el país.

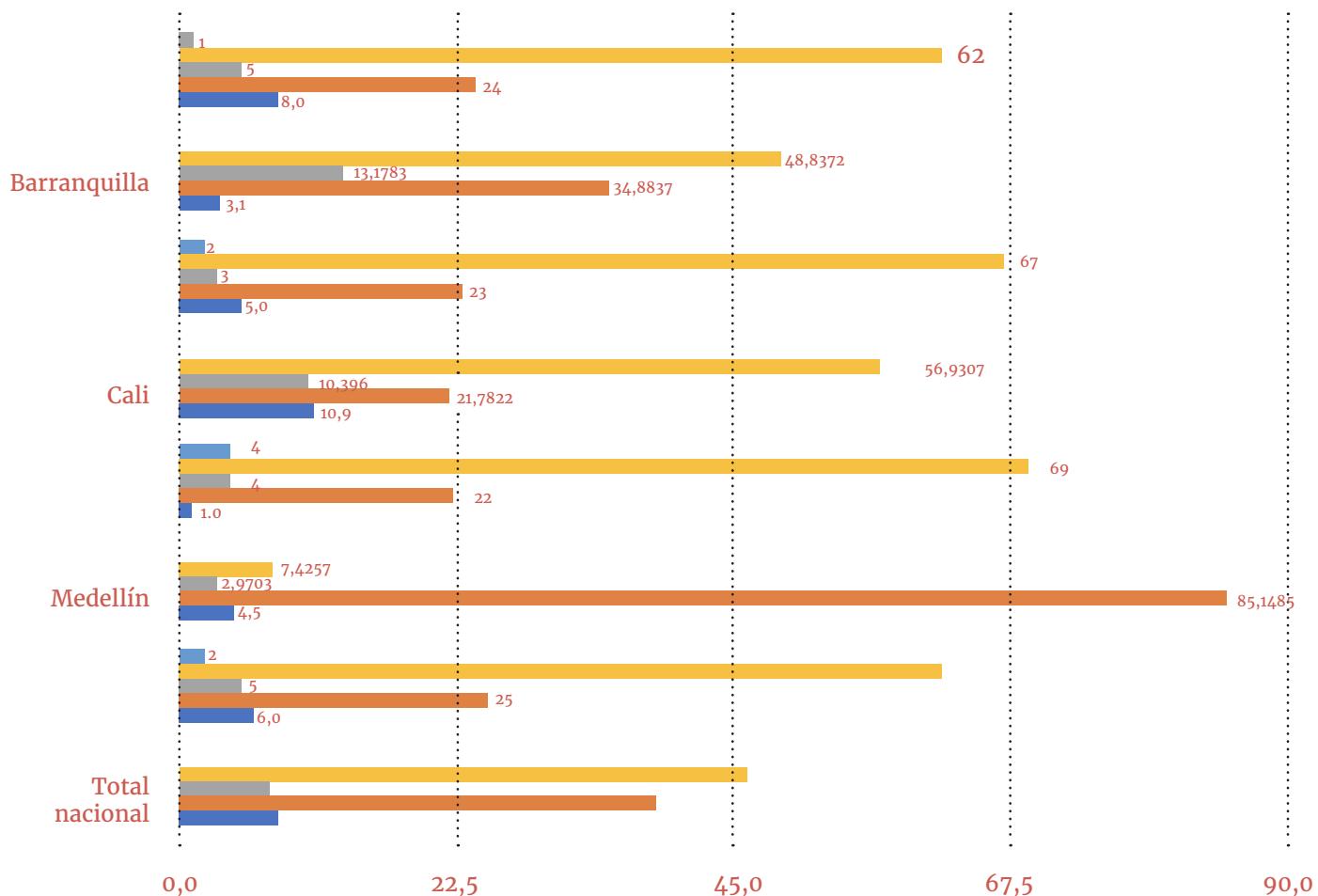
La encuesta se aplicó de manera personal a 1.223 representantes del sector empresarial de siete ciudades —Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira— para entender sus percepciones frente a la población venezolana residente en el país y sus niveles de involucramiento en iniciativas para la inclusión económica de migrantes. La identificación de las empresas se realizó a partir de las bases de datos de las Cámaras de Comercio de las ciudades priorizadas, y se hizo un diseño muestral estableciendo el número total de empresas matriculadas, calculando su participación por ciudad. De esa manera, la muestra se distribuyó según el nivel de la participación y tamaño de la empresa. La encuesta

tiene un margen de error de 2.8%, con 95% de confianza con respecto a la muestra representativa por el aglomerado de empresas de las siete ciudades. La recolección de información se realizó entre el 15 de junio y el 15 de agosto de 2021.

También se encuentra la Encuesta Nacional de Paz realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya última medición fue en 2018 y se diseñó con un muestreo estratificado entre ciudades capitales y otras cercanas al conflicto. Esto permite hacer análisis segmentados geográficamente para caracterizar las percepciones empresariales de acuerdo con la incidencia del conflicto en los territorios donde operan.

Gráfico 10. Principal razón por la que considera que el sector empresarial debe vincularse a la construcción de paz en el país.

Comparativo Encuesta de percepción empresarial frente a migrantes y Encuesta Nacional de paz



- Para obtener licencia social en la zona de operación
- Es un deber con el país, los ciudadanos y las víctimas
- Es una obligación legal
- Es una oportunidad para generar nuevos mercados y mayor riqueza
- Índice en la buena reputación de la empresa

A continuación, hacemos una revisión de las mediciones enlistadas con el ánimo de identificar convergencias entre las encuestas que permitan caracterizar las percepciones empresariales en torno a la inclusión laboral de las poblaciones vulnerables. Es preciso aclarar que, dadas las diferencias entre los diseños muestrales de las encuestas, los tiempos de recolección de información y la intención con la que fueron realizadas, las comparaciones aquí realizadas a partir de las encuestas utilizadas son de carácter inferencial y tienen un ánimo meramente enunciativo. El interés es caracterizar los contextos de las tres ciudades de interés.

Frente a las percepciones empresariales, el primer dato relevante es que, de acuerdo con los datos suministrados por la Encuesta Nacional de Paz, 8 de cada 10 empresarios consideran que el sector empresarial debe vincularse a la construcción de paz. Para el caso de las ciudades, este porcentaje asciende al 87% para Barranquilla, 82% para Medellín y 78% para Cali. Cuando en la encuesta de percepciones frente a la migración se pregunta sobre la importancia de las medidas de integración a migrantes, el 74% considera importante o muy importante estas medidas.

Como se observa en el gráfico 4, al preguntar a los empresarios en la Encuesta Nacional de Paz las principales razones por las que consideran que el sector empresarial debe vincularse a la construcción de paz, el 62% lo menciona como un deber con Colombia, los ciudadanos y las víctimas. En la encuesta de percepciones empresariales, el 46,1% de los empresarios opinan de la misma manera.

La segunda razón por la que los empresarios encuestados consideran importante vincularse a la construcción de paz, es la percepción de oportunidades para generar nuevos mercados y mayor riqueza. Esto se conserva en ambas mediciones desde el agregado nacional. Luego está la oportunidad reputacional y lo que eso significa para las empresas; y, en

cuarto lugar, la obligación legal para la vinculación de empresas en la construcción de paz.

Es distinto cuando se comparan los resultados por ciudad. Observamos que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Paz, en las tres ciudades se considera que la principal razón para vincularse es por el deber con el país, los ciudadanos y las víctimas; en contraste, en la encuesta de percepciones empresariales, el 85% de empresarios en Medellín lo mencionó como una oportunidad para generar nuevos mercados y mayor riqueza.

Las dos principales razones elegidas por los empresarios para vincular al sector empresarial en la construcción de paz están estrechamente relacionadas con la agenda de desarrollo territorial inclusivo. En este punto resulta clave el enrolamiento del sector empresarial en las acciones afirmativas como una responsabilidad con el entorno, pero también debe percibirse como una oportunidad para fortalecer la actividad económica de las empresas a través de la inclusión de estas personas en sus cadenas de valor.

En esta comparación debe notarse que, para la Encuesta Nacional de paz, se cuenta con una variable adicional (para obtener licencia social en la zona de operación) que no fue incluida en la encuesta de percepciones empresariales hacia la migración. Esto incide en los porcentajes de respuesta por opción para esa encuesta.

Análisis de los factores que inciden en la percepción de empresarios sobre la situación económica de sus ciudades

Para profundizar en la reflexión sobre los factores que inciden en las percepciones del sector empresarial frente a la vinculación laboral de poblaciones vulnerables al acceso a empleo, hicimos un análisis de los datos de la encuesta “Entendiendo la Mirada Empresarial Frente al Fenómeno Migratorio en Colombia”, realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Konrad Adenauer en 2021. Aunque esta se enfoca en las percepciones de empresas frente a la migración, el objetivo de esta sección es sugerir algunas oportunidades de análisis de las percepciones empresariales que puedan ser replicadas con otros grupos poblacionales.

Tomamos los datos de la encuesta para, con la ayuda de modelos económicos, analizar la asociación de factores que inciden en (1) la percepción de la situación económica de las ciudades, y (2) la confianza por parte de empresarios hacia la población migrante venezolana. Además, exploramos los resultados de la encuesta y su correlación con variables económicas de contexto, en particular la tasa de desempleo, Coeficiente GINI, Pobreza Monetaria y Pobreza Extrema.

Esta selección de variables ayuda a caracterizar algunos determinantes contextuales que podrían incidir en la percepción de los empresarios frente a la inclusión sociolaboral de migrantes: expectativa sobre la situación económica y niveles de confianza hacia la población migrante. Un estudio empírico basado en los datos de la misma encuesta (Rangel,

2021a) sostiene que la muy alta satisfacción del desempeño de migrantes contratados está estrechamente relacionada con la percepción de confianza que les genera la población migrante venezolana a quienes trabajan en las empresas encuestadas. Para ello, usamos la variable Confianza en la población migrante que trabaja en la empresa como dependiente en los siguientes apartados. En el anexo presentamos la tabla de variables y definiciones utilizada.

Usando el test estadístico de análisis de varianza (anova)⁵ para comparar el efecto de uno o más factores sobre la media de una variable continua, exploramos las diferencias sobre dos variables dependientes: percepción de la situación económica actual en las ciudades y la percepción de la situación económica futura en las ciudades. Sobre la primera, encontramos una relación significativa para la percepción de la situación económica actual pero no la futura. Eso significa que, basados en esta correlación, tiene más peso la percepción sobre el presente que las expectativas sobre el futuro. Además, encontramos diferencias significativas en la percepción de los empresarios sobre el contexto económico de las ciudades; en particular, los empresarios de Medellín tienen mejores percepciones de la situación económica de su ciudad en comparación con las otras ciudades de referencia.

Además, encontramos una diferencia significativa en la percepción que tienen los empresarios sobre la situación económica actual dependiendo del tamaño de la empresa, medido en términos del número de empleados en sus compañías. Se encuentra que las empresas con 10 o menos empleados, así como las grandes organizaciones de más de 200 personas, son las que peor percepción tienen sobre la situación económica actual de sus ciudades.

5. Al ser una prueba anova, donde uno de los supuestos es que la distribución es normal, se hizo una verificación con ARTool (Align-and-rank data for nonparametric factorial anova) y la significancia se mantiene. Es importante recordar que esto hace referencia a la asociación entre las variables, más no causalidad, teniendo en cuenta que hay muchas variables no observables que también pueden incidir en esta percepción.

En la encuesta, le pedimos a las personas que seleccionaran tres factores que, mayoritariamente, consideran que afectan la situación económica actual de su ciudad. Entre las opciones de respuesta estaban los efectos de la pandemia y la cuarentena, la ausencia de inversión estatal, la falta de articulación entre el sector público y empresarial, los niveles de informalidad, el desempleo, la llegada de población migrante y la inseguridad.

Al cruzar la variable de percepción de la situación económica actual en las ciudades con estos factores encontramos que los empresarios que no identifican la pandemia como un factor que afecta la situación económica de la ciudad tienen, en promedio, una mejor percepción sobre la situación económica. Esto da luces sobre la incidencia de la pandemia en las percepciones de los empresarios, que condicionan las decisiones de contratación.

También encontramos que los empresarios que identificaron la falta articulación público-privada como un factor que afecta el contexto económico actual de la ciudad tienen una percepción, en promedio, inferior sobre la situación actual de la economía de su ciudad. Esto sugiere que el trabajo entre el sector público y empresarial es importante para facilitar la inclusión laboral de población vulnerable como la población migrante.

De igual manera sucede con las expectativas del futuro económico de las ciudades, donde también se encuentran diferencias significativas entre quienes consideran relevante la articulación público-privada y quienes no lo hacen. Al realizar el testeo discriminando entre aquellos que consideran el desempleo entre los tres factores más importantes que afectan la situación económica de su ciudad, también encontramos diferencias significativas sobre su percepción de la situación actual de la economía de su ciudad y frente a las expectativas de su futuro económico, ya que en ambas preguntas los promedios de la percep-

ción económica son peor entre quienes consideran el desempleo uno de los principales factores.

Entre las variables ante la pregunta sobre los tres factores más importantes que afectan la situación económica de su ciudad, una de las opciones de respuesta era la llegada de población migrante. De nuevo, se presentaron diferencias significativas entre la percepción de los empresarios que consideran la migración como un factor que determina la situación económica de la ciudad y quienes no, así como frente a las expectativas de su futuro económico.

Cuando se utiliza la variable de percepción de afectación de la inseguridad en la situación económica de la ciudad, observamos diferencias significativas. En contraste con las variables de respuesta de ausencia de inversión estatal y niveles de informalidad, no arrojan diferencias significativas en la percepción de la situación económica actual y las expectativas del futuro económico en sus ciudades.

A los empresarios les preguntamos también si habían estado involucrados en alguna iniciativa dirigida a la población migrante venezolana en Colombia, cuyas opciones de respuesta eran la creación de programas de empleo para migrantes, el apoyo a la creación de emprendimientos liderados por migrantes, la inclusión como proveedores a emprendimientos o empresas lideradas por migrantes, el apoyo o creación de programas de asistencia humanitaria así como de programas de capacitación y formación para el trabajo, el apoyo o creación de programas educativos y de acceso a la salud, el apoyo o creación de programas de impulso a actividades culturales y la financiación de campañas para la prevención de la estigmatización y la xenofobia. Con estas respuestas, creamos participación en acción inclusiva, una variable binaria que indica las empresas que han realizado, al menos, alguna de las acciones descritas. De lo anterior, encontramos que las empresas que han participado en acciones dirigidas a población

migrante tienen en promedio mejor percepción sobre la situación actual de la economía de su ciudad.

La encuesta también indagó si los empresarios consideran que la población migrante, excombatiente, víctima y pospenada son un desafío o una oportunidad. En el análisis estadístico encontramos que las empresas que ven la población migrante como un desafío tienen una peor percepción sobre la situación actual de la economía de su ciudad y sobre las expectativas del futuro económico en la ciudad; en cambio, para las empresas que ven la población víctima del conflicto como un desafío, encontramos que tienen una mejor percepción sobre la situación actual de la economía de su ciudad. Las variables que corresponden a los otros grupos poblacionales observados (excombatientes desafío y pospenados desafío), no presentan diferencias significativas.

Análisis de los factores que inciden en la percepción de empresarios sobre la confianza hacia la población migrante venezolana

Para identificar los factores asociados con la percepción de empresarios sobre la confianza hacia la población migrante venezolana, usamos como variable dependiente la confianza en la población migrante que trabaja en la empresa, una variable continua de calificación ante la pregunta *¿Qué tanta confianza cree que le genera la población migrante venezolana a quienes trabajan en su empresa?* (siendo 1 ninguna confianza y 4 mucha confianza). En este caso se realiza una verificación con ARTool para comprobar la significancia de diferencias entre las ciudades.

Encontramos que los empresarios identificaron los efectos de la pandemia y la cuarentena como uno de

los tres factores que, mayoritariamente, afectan la situación económica actual de su ciudad, siendo mayor entre los que no eligieron la pandemia como un factor.

La percepción de confianza en la población migrante que trabaja en la empresa también tiene diferencias entre aquellas empresas que identifican la falta de articulación público-privada como un factor que afecta mayoritariamente la situación económica de su ciudad, las cuales presentan menores percepciones de confianza en contraste con quienes no lo identifican como un factor. De manera análoga sucede con las empresas que seleccionaron entre los principales factores que afectan el contexto económico de las ciudades la informalidad, ya que quienes seleccionan esta como una opción tienen mejores percepciones de confianza; y la llegada de migrantes, en la que, quienes no seleccionaron esta opción presentan mejores indicadores de confianza hacia los migrantes.

Esto demuestra que existe una relación entre la percepción de los efectos de la migración en la sociedad con la confianza que se siente hacia los migrantes en entornos laborales. Sin embargo, al cruzar la variable que recoge a las empresas que consideran la migración como un desafío, quienes presentan percepciones de mayor confianza que podría generar una persona migrante en su equipo de trabajo son justo los que seleccionaron que la migración es un desafío y no una oportunidad.

Correlaciones entre la percepción de la situación económica, niveles de confianza hacia migrantes y variables del contexto económico

Para profundizar en la identificación de variables que inciden en la percepción del presente y futuro económico de las ciudades, así como los niveles de confianza, realizamos un análisis estadístico que permite delimitar la correlación entre estas variables con indicadores que sirven para medir la situación económica de las ciudades, en particular la tasa de desempleo, el coeficiente GINI, la pobreza monetaria, la pobreza monetaria extrema y el índice de confianza al consumidor (ICC). Tomamos los datos oficiales del Departamento Administrati-

vo Nacional de Estadística (DANE) para 2021, momento en el cual se realizó la encuesta. Para los reportes que tienen periodicidad trimestral, tomamos los datos del periodo mayo-julio 2021.

Como se asume que las variables no tienen una distribución normal, utilizamos un coeficiente de correlación de Spearman, que consiste en establecer un ranking para luego establecer la correlación entre las variables. Se debe considerar que, al ser una muestra con pocas observaciones (siete en total, una de cada ciudad), las relaciones aquí presentadas tienen un carácter indicativo que podrían llevar a otras conclusiones.

Cuando el coeficiente se encuentra entre 0.5 y 0.7 se considera que existe una interacción entre ambas variables moderadamente relacionada, y una fuerte correlación con un coeficiente mayor a 0.7.

Tabla de resultados

Variable independiente		Percepción situación Económica (b1_3)	Percepción situación Económica en 12 meses (b1_4)	Percepción de confianza en la población migrante venezolana confianza
Ciudad	Barranquilla	3.2***	2.5***	2.5***
	Bogotá	3.6***	2.8***	2.1***
	Bucaramanga	3.4 ***	2.6***	2.1***
	Cali	3.5 ***	2.5***	2.5***
	Cúcuta	3.4***	2.8***	2.4***
	Medellín	2.6***	2.4***	2.6***
	Pereira	3.5***	2.6***	2.5***
Número de empleados	10 o menos	3.5***	2.6	2.2***
	Entre 11 y 50	3.1***	2.5	2.5***
	Entre 51 y	3.2***	2.6	2.4***
	Más de 200	3.3***	2.7	2.4***
	Pandemia	3.5*** (n=833)	2.6 (n=833)	2.3** (n=833)

Variable independiente		Percepción situación Económica (b1_3)	Percepción situación Económica en 12 meses (b1_4)	Percepción de confianza en la población migrante venezolana confianza
Factores que afectan la ciudad	Articulación Público Privada	3.0 ***(n=323)	2.5 ***(n=323)	2.5* (n=323)
	Informalidad	3.2 (n=252)	2.6 (n=252)	2.5 **(n=252)
	Desempleo	3.5*** (n=636)	2.7** (n=636)	2.4 (n=636)
	Llegada de migrantes	3.5 ***(n=470)	2.8 ***(n=470)	2.2*** (n=470)
	Inseguridad	3.4*** (n=423)	2.7* (n=423)	2.3 (n=423)
Iniciativas	Al menos 1	3.0 ***(n=395)	2.6 (n=395)	2.6*** (n=395)
Poblaciones consideradas desafíos	Población Migrante	3.1 *** (n=486)	2.5 *** (n=486)	2.6 *** (n=486)
	Víctimas	3.4*** (n=749)	2.6 (n=749)	2.4 (n=749)
	Excombatientes	3.3 (n=484)	2.6 (n=484)	2.4 (n=484)
	Privada de la Libertad	3.3 (n=528)	2.6 (n=528)	2.5** (n=528)

N=1,223

*** p-value<0.001

**p-value<0.05

*p-value<0.1

Así las cosas, encontramos una correlación moderada entre las expectativas del futuro económico de las ciudades y la tasa de desempleo, los niveles de pobreza monetaria y el índice de confianza al consumidor. También entre la confianza que sienten los encuestados que podría tener el equipo de trabajo de sus empresas sobre la población migrante y la pobreza monetaria.

Además, encontramos una fuerte correlación entre la percepción económica de los empresarios sobre los últimos 12 meses y la tasa de desempleo, la percepción económica y los índices de pobreza extrema, y la percepción de confianza que sienten los encuestados que podría tener el equipo de trabajo de sus empresas sobre la población migrante con la variable de pobreza extrema.

Las percepciones sobre el presente económico condicionan las dinámicas de inclusión sociolaboral,

incluso más que las expectativas futuras. Si se lee esto en el marco de la recuperación económica tras la pandemia se concluye que, aunque exista optimismo frente al contexto económico futuro, las decisiones de contratación se toman en tiempo presente de acuerdo con la información con la que cuentan las empresas. Esto se confirma al evidenciar que los empresarios que no consideran la pandemia como uno de los principales factores que afecta la situación económica, tienen mejores percepciones sobre el presente económico de sus ciudades. En síntesis, lo que piensan las empresas sobre el impacto de la pandemia es uno de los principales condicionantes coyunturales de la dinámica de inclusión sociolaboral de poblaciones vulnerables.

Estas afectaciones, además, deben leerse de manera contextual de acuerdo con la incidencia de pobreza y densidad de personas con vulnerabilidades para acceder a empleo en las ciudades. De manera

consistente aparece Barranquilla como la ciudad con índices más elevados de pobreza monetaria y multi-dimensional, así como mayor densidad de víctimas y migrantes en contraste con su número de habitantes. Para el caso de Cali deben revisarse con detenimiento las afectaciones del Paro Nacional en la dinámica de inclusión, ya que, como se narra en las voces del sector empresarial de la ciudad, la situación trasciende los impactos de la pandemia y se ve reflejada en las afectaciones diferenciadas que tuvo la coyuntura del paro en una ciudad que reporta la tercera mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

En esa línea, las percepciones empresariales también están marcadas por la percepción de las empresas sobre la articulación entre el Estado y el sector privado. Esto debe leerse como la capacidad de orientar acciones comunes para el propósito de incluir, que requiere de la sumatoria de esfuerzos encaminados hacia ese objetivo. Las empresas están dispuestas a participar en las lógicas de inclusión pero requieren una línea orientadora que les permita tomar decisiones en consecuencia, asunto que debe liderarse desde las autoridades municipales en concurso con gremios empresariales y representativos del sector privado que lideren una discusión sobre las formas en las que el involucramiento empresarial sea estratégico para la inclusión. Todo ello, por supuesto, afecta las percepciones futuras del contexto económico de la ciudad, dado que, en la medida que se encuentra coherencia entre los esfuerzos de autoridades locales con el sector privado, hay mayor optimismo para realizar los objetivos trazados.

Los hallazgos de correlaciones entre la percepción de los empresarios sobre la situación económica y la consideración sobre la población migrante y víctima del conflicto como un desafío para el país, puede explicarse a partir de las coyunturas en las cuales ambas poblaciones aparecen como prioritarios de especial atención. Por el lado de las víctimas del conflicto, el reconocimiento de la necesidad de

acciones afirmativas viene anclado a la vivencia de décadas del conflicto armado en Colombia que ha permeado la vida social y política del país. Por ello, gozan de cierta aceptación los esfuerzos para la atención a víctimas. De acuerdo con el Invamer Poll de agosto 2022, el 52% de los colombianos está de acuerdo con pagar impuestos para darle ese dinero a las víctimas de la violencia en Colombia.

Por el lado de la población migrante, en cambio, la emergencia humanitaria por el éxodo masivo se trata de una coyuntura reciente en el contexto nacional que, además, coincidió con la emergencia de la pandemia y el Paro Nacional. Esta situación ha sido adversa a la integración sociolaboral de migrantes dadas las narrativas xenófobas que señalan a la población migrante como causante, en parte, de las dificultades que afronta el país (Rangel, 2021b). La percepción mayoritaria frente a la migración venezolana es que esta es una externalidad indeseada en el país, lo que explicaría la correlación negativa entre la percepción hacia migrantes y la situación económica. Esto también se confirma a partir de las encuestas de Invamer Poll de agosto de 2022, donde se reporta que el 59% de los colombianos está en desacuerdo con que el gobierno colombiano entregue permisos de protección temporal por 10 años a los venezolanos que estén indocumentados en Colombia.

Las diferencias en los orígenes de vulnerabilidad de migrantes y víctimas resultan condicionantes de las percepciones que se tienen frente a estas poblaciones, y la correlación entre la consideración de estas poblaciones como desafío y la percepción de la situación económica sugiere que la narrativa bajo la cual se justifican las acciones afirmativas es crucial para crear un ambiente propicio hacia la integración sociolaboral.

Conclusiones

Conclusiones

La hipótesis de la cual partimos es que el contexto está relacionado con las percepciones y expectativas de los empresarios sobre la inclusión laboral de personas que hacen parte de grupos poblacionales con vulnerabilidades.

Las empresas reconocen que tienen un papel que jugar en la inclusión de población vulnerable. No obstante, no basta con que tengan la voluntad e intención de incluir a personas o colectivos: hay elementos del contexto y condiciones de los propios sujetos de inclusión que facilitan o complejizan los procesos inclusivos. Estas fueron algunas de las principales conclusiones de las conversaciones con el sector empresarial en Cali, Medellín y Barranquilla.

Los niveles de inclusión en el país están marcados por la reciente afectación económica debido a la emergencia social y sanitaria derivada del covid-19, que impactó de manera diferenciada a los hogares, según sus capacidades económicas previas a la pandemia, y cuyas capacidades para sobreponerse a las situaciones de privación también se condicionan por el goce efectivo que tenían antes de la pandemia. La recuperación económica de jefes de hogar se dio de manera más pronunciada en las clases altas (3.6%) sobre las bajas (2.6%), quienes, además, tienen un 23.8% de probabilidad de estar ocupados laboralmente si cuentan con un título de educación posmedia.

Si se mira a través del índice de pobreza multidimensional (IPM), encontramos que, para 2021, el 16% de personas en el país tenían privaciones en el goce efectivo de derechos, lo que hace que sean considerados pobres (con marcadas diferencias entre las cabeceras municipales y las zonas rurales). En las ciudades capitales incluidas en este estudio, encontramos que los indicadores de porcentaje de personas sin aseguramiento en el sistema de salud y barreras de acceso al servicio de salud, dada una

necesidad y la tasa de dependencia económica, son los principales retos urbanos ya que se reportan por encima de la media nacional.

Una de las principales rutas para superar las condiciones de pobreza monetaria y multidimensional es el incentivo a la empleabilidad pues permite la mejora de la calidad de vida y movilidad social a partir de los ingresos por salarios percibidos en los hogares. De allí se desprende el interés por estudiar las percepciones empresariales que inciden en las decisiones de contratación y promoción de políticas de empleo inclusivo. Una de las variables a las que recurrimos para recoger el pulso de los empresarios es el índice de confianza al consumidor, que sirve para monitorear los incentivos de consumo percibidos por las firmas. Al revisar las tendencias del ICC para Barranquilla, Cali y Medellín, encontramos que las tres ciudades presentan mayores índices de confianza en comparación con la media nacional, pero con tendencias disímiles entre los trimestres julio-septiembre 2020 y julio-septiembre 2022. Eso sugiere que, si bien existen condicionantes macro que afectan las tendencias de las ciudades, también hay factores internos que afectan los niveles de confianza al consumidor. Cali y Medellín han tenido recuperaciones en la confianza de consumidores significativamente más pronunciadas que lo que se encuentra para el caso de Barranquilla; incluso, con mejor desempeño que el total de las 23 ciudades principales.

En el análisis priorizamos a la población migrante de origen venezolano y a la población víctima del conflicto para caracterizar la situación de goce de derechos en las ciudades priorizadas como una forma de ilustrar los retos contextuales en materia de inclusión que atañen a estos grupos. Con respecto a las víctimas del conflicto, aunque el 76% de ellas están por encima de las situaciones de vulnerabilidad (SSV), las principales privaciones a las que están expuestas se relacionan con la generación de ingresos, condiciones de vivienda y el goce efectivo del dere-

cho a la salud. En el caso de la población migrante de origen venezolano encontramos que, de acuerdo con el Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica de la población migrante venezolana (IMI), Medellín y Cali presentan niveles sostenidos de integración en contraste con Barranquilla, tiene mayor proporción de migrantes por número de habitantes.

El análisis del contexto económico de las ciudades y las condiciones de inclusión de población migrante y víctima del conflicto se hace con el fin de explorar los determinantes contextuales que inciden en la percepción empresarial sobre inclusión laboral de poblaciones vulnerables. Para ello, exploramos mediciones que anteceden a esta investigación y que preguntan directamente al sector empresarial sobre su rol en la promoción de políticas laborales inclusivas.

En un comparativo de dos encuestas representativas a nivel empresarial del país, encontramos que la principal razón para que la empresa se involucre en procesos de construcción es porque es un deber con el país, los ciudadanos y las víctimas; la segunda razón es por una percepción de oportunidades para generar nuevos mercados y mayor riqueza. Ambas están relacionadas con las agendas de desarrollo territorial inclusivo, en las cuales la participación del sector empresarial es necesaria, y en la que las empresas deben percibir incentivos para que ese involucramiento suponga fortalecer su competitividad.

Con el ánimo de indagar sobre algunos factores relacionados con las percepciones empresariales sobre la inclusión, tomamos los datos de la encuesta “Entendiendo la Mirada Empresarial Frente al Fenómeno Migratorio en Colombia”, realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Konrad Adenauer en 2021. Cruzamos las percepciones de los encuestados sobre la situación económica presente y futura en las ciudades, así como la confianza percibida por parte de empresarios que existe den-

tro de las empresas con respecto de la población migrante venezolana.

Encontramos que, en promedio, los representantes empresariales encuestados que perciben a los migrantes como un desafío tienden a tener una peor percepción del contexto económico municipal. En contraste, quienes consideran a las víctimas del conflicto como una oportunidad, tienen percepciones más positivas de la situación económica. También parece haber una correlación moderada entre las expectativas del futuro económico de las ciudades y la tasa de desempleo, los niveles de pobreza monetaria y el índice de confianza al consumidor. Igualmente entre la confianza que las personas encuestadas creen que le genera la población migrante venezolana a quienes trabajan en su empresa y la pobreza monetaria. Además, encontramos una fuerte correlación entre la percepción económica de los empresarios sobre los últimos 12 meses y la tasa de desempleo, la percepción económica y los índices de pobreza extrema, y la percepción de confianza que sienten los encuestados que podría tener el equipo de trabajo de sus empresas sobre la población migrante con la variable de pobreza extrema.

Con estas correlaciones se hace evidente la interrelación entre el contexto de las ciudades y la toma de decisiones de las empresas para involucrarse en la inclusión laboral de poblaciones vulnerables, lo que permite identificar rutas para la promoción de acciones acordes con las realidades contextuales de los territorios, reconociendo los factores que moldean las percepciones empresariales frente a la inclusión.

Referencias

Álvarez-Rodríguez, A. A. (2021). El Paro nacional del 2021 en Colombia: estallido social entre dinámicas estructurales y de coyuntura. La relevancia de la acción política y del diálogo en su desarrollo y transformación. Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social, (33), 1-12. doi: 10.25100/prts.v0i33.11864.

Andi (2022) <https://www.andi.com.co/Uploads/Empresas%20Incluyentes%202a%20edicio%C-C%81n.pdf>

Andi (2022) https://www.fundacioncorona.org/sites/default/files/documentos_tecnicos/INEI_2020_2021282.pdf

Andi (2020) [https://www.andi.com.co/Uploads/Paper%20Inclusi%C3%B3n%20Laboral%20a%20Poblaci%C3%B3n%20Migrante%20-%20Junio%2026%20\(1\).pdf](https://www.andi.com.co/Uploads/Paper%20Inclusi%C3%B3n%20Laboral%20a%20Poblaci%C3%B3n%20Migrante%20-%20Junio%2026%20(1).pdf)

Andi (2019) <https://www.andi.com.co/Uploads/M%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20la%20Discapacidad,%20una%20oportunidad%20de%20inclusi%C3%B3n%20laboral%20cr.pdf>

Angulo, C., Díaz, Y., & Pardo, R. (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM- Colombia) 1997-2010. http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/679/related_materials

Encuesta Nacional de Paz realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (2018)

Deaton, A & Zaidi, S. (2002) Guidelines for constructing aggregates for welfare analysis. Washington DC: The World Bank.

FIP y KAS (2021) https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/sites/default/files/documentos-micro/FIP_KAS_EmpresasMigracion_0.pdf Entendiendo la mirada empresarial frente al fenómeno migratorio en Colombia.

Guerra (2011) Alcances y orígenes de las políticas de trabajo, de empleo e inclusión social. Revista electrónica de humanidades, educación y comunicación social REDHECS. Edición No 10 Año 6 marzo 2011. ISSN: 1856-9331.
<http://ojs.urbe.edu/index.php/redhecs/article/view/242/194>

DANE (2021) Análisis de las clases sociales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia 2019-2021. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/analisis_clases_sociales_23_ciudades.pdf
DANE de Patrones y Tendencias de la Transición Urbana en Colombia

Hartzman, Rubén (1999), "Marco conceptual sobre activos, vulnerabilidad y estructura de oportunidades" (LC/MVD/R.180), Montevideo, oficina de la CEPAL en Montevideo

Rangel (2021a) ¿qué explica la alta satisfacción de empleadores colombianos frente al desempeño de migrantes de origen venezolano contratados como personal de base? Una aproximación empírica Rangel (2021b). Xenofobia, movilizaciones y la teoría del chivo expiatorio. Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de <https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/xenofobia-movilizaciones-y-la-teoria-del-chivo-expiatorio>

Semana y FIP (2020) <https://www.semana.com/especiales-multimedia/articulo/especial-integra2/202100/Integrados>

Galtung, Johan (1969). Violence, peace, and peace research, Journal of Peace Research, vol. 6 no 3, pp. 167-191.
INVAMER (2022). Invamer poll Agosto 2022. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/590400009/2022-08-Invamer-Poll-150>

Anexos

Lista de variables

Variable	Código variable	Definición
Variables dependientes		
(1) Percepción de la situación económica en las ciudades		
Percepción de la situación económica actual en las ciudades	b1_3	Variable continua de 1 a 5 donde 1 indica que la empresa considera que hoy la situación económica de su ciudad es mucho mejor comparada con la de hace 12 meses, y 5 cuando se considera que es mucho peor.
Percepción de la situación económica futura en las ciudades	b1_4	Variable continua de 1 a 5 donde 1 indica que la empresa considera que la situación económica de su ciudad será mucho mejor comparada con la situación actual.
2) Confianza percibida parte de empresarios que existe en los equipos de las empresas hacia la población migrante venezolana)		
Confianza en la población migrante que trabaja en la empresa	d19	Variable continua de calificación ante la pregunta: ¿Qué tanta confianza cree que le genera la población migrante venezolana a quienes trabajan en su empresa? (siendo 1 ninguna confianza y 4 mucha confianza)
Variables independientes o de control		
Ciudad	ciudad	Variable binaria en la 1 indica que el empresario considera uno de los tres principales factores que afectan mayoritariamente la situación económica actual de su ciudad son los niveles de informalidad, 0 en caso contrario
Tamaño de empresa	a4	Variable binaria en la 1 indica que el empresario considera uno de los tres principales factores que afectan mayoritariamente la situación económica actual de su ciudad es el desempleo, 0 en caso contrario
Percepción de afectación de la pandemia	b2_1	Variable binaria en la 1 indica que el empresario considera uno de los tres principales factores que afectan mayoritariamente la situación económica actual de su ciudad sobre la llegada de población migrante, 0 en caso contrario
Percepción de afectación de ausencia de inversión estatal	b2_2	Variable binaria en la 1 indica que el empresario considera uno de los tres principales factores que afectan mayoritariamente la situación económica actual de su ciudad es la inseguridad, 0 en caso contrario
Percepción de afectación de articulación entre sector público y sector empresarial	b2_3	Variable binaria en la 1 indica que el empresario ha liderado o participado en una acción dirigida hacia la población migrante venezolana, 0 en caso contrario
Percepción de afectación de la informalidad	b2_4	Variable binaria en la 1 indica que el empresario considera uno de los tres principales factores que afectan mayoritariamente la situación económica actual de su ciudad son los niveles de informalidad, 0 en caso contrario

Variable	Código variable	Definición
Percepción de afectación del desempleo	b2_5	Variable binaria en la 1 indica que el empresario considera uno de los tres principales factores que afectan mayoritariamente la situación económica actual de su ciudad es el desempleo, 0 en caso contrario
Percepción de afectación sobre la llegada de población migrante	b2_6	Variable binaria en la 1 indica que el empresario considera uno de los tres principales factores que afectan mayoritariamente la situación económica actual de su ciudad sobre la llegada de población migrante, 0 en caso contrario
Percepción de afectación de la inseguridad	b2_7	Variable binaria en la 1 indica que el empresario considera uno de los tres principales factores que afectan mayoritariamente la situación económica actual de su ciudad es la inseguridad, 0 en caso contrario
Participación en acción inclusiva	iniciativa	Variable binaria en la 1 indica que el empresario ha liderado o participado en una acción dirigida hacia la población migrante venezolana, 0 en caso contrario
Percepción de migrantes como oportunidad	migrantes_desafio	Variable binaria en la que 0 indica que el empresario considera que la población migrante es un desafío, 1 si considera que es una oportunidad.
Percepción de víctimas como oportunidad	victimas_desafio	Variable binaria en la que 0 indica que el empresario considera que las víctimas del conflicto es un desafío, 1 si considera que es una oportunidad.
Percepción de excombatientes como oportunidad	excombatientes_desafio	Variable binaria en la que 0 indica que el empresario considera que los excombatientes son un desafío, 1 si considera que es una oportunidad.
Percepción de personas pospenadas como oportunidad	pospenados_desafio	Variable binaria en la que 0 indica que el empresario considera que las personas pospenadas son un desafío, 1 si considera que es una oportunidad.
Tasa de desempleo	TD	Variable continua que indica la Tasa de desempleo de las ciudades para 2021 de acuerdo con cifras DANE
GINI	GINI	Variable continua entre 0 y 1 que indica el coeficiente GINI en las ciudades de referencia para 2021 de acuerdo con cifras DANE
Pobreza monetaria	Pobreza_Monetaria	Variable continua que indica el porcentaje de personas que están por debajo de la linea de pobreza de las ciudades para 2021 de acuerdo con cifras DANE
Pobreza monetaria extrema	Pobreza_monetaria_extrem	Variable continua que indica el porcentaje de personas que están por debajo de la línea de pobreza extrema de las ciudades para 2021 de acuerdo con cifras DANE
Índice de Confianza al Consumidor	ICC	Variable continua que corresponde al Índice de Confianza al Consumidor de acuerdo con cifras DANE correspondientes al trimestre mayo-julio 2021

